

ENERO 15 DE 1913

57.^a REUNION. CONTINUACION DE LA 2.^a SESION EXTRAORDINARIA

Presidencia del Gral. ROSENDO M. FRAGA y del Dr. MIGUEL M. PADILLA

Diputados presentes: Acosta, Agote, Anchoona, Araya, Atencio, Avellaneda, del Barco, Bas, Beltrán, Bengolea, Bereceteche, Cafferata, Calderón, Carballido, Carbó, Cárcano, Carlés, Carranza, Castillo, Ceselia, Conforti, Coronado, Drago, Escobar, Estrada, Etcheverry, Fournouge, Frías, Funes, Galigniana Segura, Gallo, García González, Gómez (C. F.), Gómez (J. R.), Gonnet, González Bonorino, Guevara, Igarzábal, Jaramillo, Justo, Laurencena, Leguizamón, Lezica, Linares, López, Lubary, Luro, Llobét, Massa, Molina, Mora y Araujo, Olmedo, Padilla (E. E.), Palacios, Parera (F. M.), Parera (R. A.), Pastor, Paz, Peña, Peña, Pesenti, Saguié, Sánchez Viamonte, Santillán, Solari, Tenreiro, de la Torre, Valdez, del Valle, Varela, Vergara, Zeballos (E. S.).—**Ausentes con licencia:** Alvear, Arraga, Avalos, Cantilo, Ceballos (A.), Loza, Ordóñez, Pinedo, Rolón, Saavedra Lamas, Serrey.—**Ausentes con aviso:** Bonifacio, Bréard, Frers, Lassaga, Lavié, Leiva, Méndez Casariego, Moreno, Oliver, Roca, Sobral, Terán, de la Vega.—**Ausentes sin aviso:** Albarracín, Arancibia Rodríguez, Arias, Benegas, Cabanillas, Castañeda Vega, Echegaray, Etcheopar, Freyre, González Pérez, Mariño, Mena, Moyano, Pérez, Rothe, Santamarina, Semprún.

SUMARIO N.º 57

5

1

Moción de tratar sobre tablas el despacho de la comisión de peticiones y poderes sobre la elección de un diputado, practicada en el distrito electoral de Corrientes.

Consideración del asunto a que se refiere el número 1.—**Incorporación** del diputado electo, doctor Justino I. Solari.

2

Despacho de las comisiones.

6

Continúa la consideración del despacho de la comisión de legislación en el proyecto de ley del señor diputado Carlos Carlés sobre jubilaciones y pensiones de empleados ferroviarios.

3

Peticiones particulares.

4

Minuta de comunicación al Poder ejecutivo, por el señor diputado Gerónimo del Barco y otros, manifestándole el agrado con que la honorable Cámara veía que al regimiento número 2 de caballería de línea se le diera el nombre de su fundador, general José María Paz.

—En Buenos Aires, a 15 de enero de 1913, el señor presidente declara reabierta la sesión a las 4 y 10 p. m.

1

MOCIÓN

Sr. Estrada—Pido la palabra.

Existe en secretaría un despacho de la comisión de peticiones aprobando el diploma del señor diputado electo por Corrientes, doctor Solari.

Hago moción para que, previa lectura, sea considerado sobre tablas.

Sr. Carlés—No, señor diputado; en el orden de las preferencias sancionadas por esta Cámara.

Sr. Palacios—En el orden de las preferencias, señor diputado.

Sr. Estrada—Insisto en que sea sobre tablas.

Sr. Presidente—Se va, previamente a dar lectura de los asuntos entrados.

2

DESPACHO DE LAS COMISIONES

—La comisión de peticiones y poderes se expide en la elección practicada en el distrito electoral de Corrientes, por la que resulta electo diputado el doctor Justino I. Solari.

3

PETICIONES PARTICULARES

—La Liga de defensa comercial solicita la reducción del impuesto al kerosene y a las bombas a máquina. (*A la comisión de presupuesto.*)

4

PROYECTO DE MINUTA

La honorable Cámara de diputados vería con agrado que el Poder ejecutivo, en homenaje a la memoria del ilustre guerrero general don José María Paz, fundador del regimiento número 2 de caballería de línea le diera su nombre.

G. del Barco—Manuel Peña—Arturo M. Bas—J. M. Olmedo—Justino M. Lezica—R. M. Fraga

Sr. Del Barco—Pido la palabra.

Honrar la memoria de los hombres eminentes, de aquellos que en épocas aciagas se sacrificaron para darnos patria y libertad, es obra patriótica, a la vez que fecunda enseñanza para la juventud.

El general José María Paz, de quien dijera Mitre en su tumba, que encerraba en breve espacio medio siglo de trabajos e infortunios, que fué la capacidad militar más vasta de la América del Sud, la gloria más excelsa de nuestra patria, de ideas más elevadas de patriotismo, de probidad más severa y, lo que vale más que todo esto, la virtud más acrisolada del ciudadano; el general Paz, decía, no ha recibido sino en parte el pago de la deuda de gratitud histórica: el monumento que Córdoba erigiera en su memoria.

Pero el país no está en el mismo caso; y su Capital, por la que se sacrificó con heroísmo, no ostenta nada que revele la acción, la obra, la vida del gran soldado.

El general Paz, que improvisó cuatro ejércitos, que mandó seis como general en jefe, que dirigió la defensa de Montevideo y de Buenos Aires, que fué dos veces ministro de la guerra, dos veces gobernador de Córdoba y dos director de la campaña contra Rosas; el general Paz, que combatió en Salta, Tucumán, San Lorenzo, Pequereque, Vilona, Puesto del Marqués, Ayohuma, Vilcapugio, Venta y Media, en donde fué herido, Herradura, Calchines, El Pilar, Camacuá, Filiberto e Ituzaigó; que venció en San Roque, La Tablada, Oncativo y Caaguazú; con todos estos títulos a la gratitud y recuerdo de la posteridad, no hay un cuerpo del ejército que lleve su nombre, como llevan el de otros ilustres guerreros de nuestra independencia y luchas por la unidad nacional.

Y ninguno con más títulos y orgullo debe llevarlo que el 2 de caballería de línea, que él fundó, modeló y disciplinó a su modo.

En efecto, por ley del Congreso constituyente de las Provincias Unidas, de 21 de mayo de 1825, se dispuso que el ejército nacional constaría, además de las unidades que existían, de seis regimientos de caballería, debiendo tener cada regimiento cuatro escuadrones, ca-

6

JUBILACIÓN

DE EMPLEADOS FERROVIARIOS

Sr. Bas—Pido la palabra.

Para hacer indicación de que la Cámara continúe inmediatamente considerando el asunto referente a la jubilación de empleados ferroviarios, que en la sesión anterior no se pudo votar por haber quedado la Cámara sin número.

Aparte de ser un asunto urgente, que está casi a resolverse, lo que determinará su rápida sanción, está dentro del concepto mismo con que se hizo la moción para tratar la intervención a Salta, pues el mocionante de esa oportunidad, doctor Gallo, manifestaba que no hacía la moción para que se tratara en ese día, desde que debía considerarse el despacho de la comisión de legislación y, entonces, implícitamente reconocía que este último despacho tenía prioridad, que subsiste todavía, porque no se ha votado.

Sr. Presidente—Se va a votar la moción...

Varios señores diputados—Es lo que corresponde tratar.

Sr. Gallo—Pido la palabra.

Desearía saber cuál será la situación en que va a quedar la consideración del despacho de la comisión de negocios constitucionales relativo a la intervención a Salta, en caso de ser aprobada la moción que ha formulado el señor diputado por Córdoba.

Sr. Carlés—Se tratará inmediatamente después de la jubilación ferroviaria.

Sr. Presidente—Se va a votar la moción del señor diputado por Córdoba.

Sr. Carlés—Desde que hay asentimiento general, ¿para qué se va a votar? Los mismos señores diputados radicales están dispuestos a aceptarla.

Sr. Presidente—¿Acepta el señor diputado Gallo que se continúe?...

Sr. Gallo—No tengo nada que decir.

Sr. Massa—Debe votarse, señor presidente.

Sr. Presidente—Se va a votar la moción del señor diputado por Córdoba.

—Se vota, y es aprobada.

Sr. Presidente—Continúa la consideración del despacho de la comisión de legislación sobre jubilación de empleados ferroviarios.

Sr. Olmedo—Que se avise al señor ministro de obras públicas, que está en antecámaras.

Sr. Gómez (C. F.)—Pido la palabra.

El mismo debate producido con motivo del despacho de la comisión de legislación prueba, en mi concepto, la importancia y gravedad de esta cuestión.

Sr. Peña—¿Me permite el señor diputado? Para hacer una indicación de carácter previo: que la presidencia mantenga el quórum, por lo menos hasta las ocho de la noche.

—Aprobado.

Sr. Presidente—No hay necesidad de votar. La presidencia cumplirá esa resolución.

Sr. Varela—¿Y ninguna medida para los ausentes?...

Sr. Presidente—Puede continuar el señor diputado.

—Ocupa su banca en el recinto el señor ministro de obras públicas, don Ezequiel Ramos Mexía.

Sr. Gómez (C. F.)—Como voy a votar por el despacho de la comisión, me veo obligado a dar las razones de mi voto.

Digo que la cuestión es importante y grave por tratarse del personal de ferrocarriles.

Según los datos que he hecho recoger en el ministerio de obras públicas, el personal de los ferrocarriles particulares es superior a 107.000 personas. Por consiguiente, cuando se trata de legislar sobre un personal tan numeroso y de incorporarlo a una ley como la vigente, cuyas prescripciones son tan favorables, en mi concepto, al personal de la administración, el Congreso no puede votar la ley sin grave meditación, sin estar seguro del resultado que va a dar.

El señor miembro informante de la comisión y el señor autor del proyecto han enunciado muchísimas de las más graves cuestiones que están envueltas en el proyecto de ley. ¿Cuál es, señor presidente, el crecimiento del personal

de ferrocarriles, en un país de desarrollo tan prodigioso como la República Argentina? ¿Cuál es la cuota con que las empresas de ferrocarril deben contribuir a la formación del fondo? ¿Qué se ha de decidir sobre el fondo de pensiones ya acumulado por las empresas? ¿Lo que aconseja la comisión, o lo que aconseja el autor del proyecto? ¿Cuántos son los años de servicios después de las cuales la ley debe reconocer a los empleados de ferrocarril el derecho a la jubilación? ¿A qué edad deben acogerse a sus beneficios?

Hay otro problema que también ha enunciado el autor del proyecto. Los otros gremios, por ejemplo los estibadores del puerto, que también prestan, en cierto modo, servicios públicos, o los obreros o empleados de usinas y fábricas particulares, podrían venir mañana a pretender ser incorporados a los beneficios de esta ley.

Todos estos problemas no pueden ser tratados sino con grave meditación, y no me parece prudente que se legisle en sesiones extraordinarias sobre tan fundamentales asuntos.

Por lo demás, el carácter del personal de empleados de los ferrocarriles, que escapan casi por completo a la acción del parlamento, exigirá, según mi modo de ver, una legislación muy distinta de aquella a que están sometidos los empleados civiles de la administración nacional, sobre los cuales tiene un control por medio del presupuesto y por medio de las reparticiones dependientes del gobierno de la Nación.

Por otra parte, de la misma exposición del señor autor del proyecto resulta que las más grandes empresas de ferrocarril de nuestro país tienen ya su fondo de pensiones, que alcanza, más o menos, alrededor de diez millones de pesos.

De manera que la mayor parte del personal de los ferrocarriles está amparado por ese fondo de previsión de las empresas y se acogerá, seguramente a sus disposiciones, en los casos que puedan presentarse antes de que se dé la ley definitiva. No veo, entonces, que haya mayor apuro para que sobre el tema discutamos cuestiones tan graves.

Además de todas estas consideraciones, que me inducen a pensar que de-

bemos tratar este asunto, como he dicho con grave meditación, en las sesiones del próximo período, yo entiendo que la comisión de legislación tiene en su poder la conformidad de la mayor parte de los empleados de ferrocarriles, que están interesados en la tramitación de este asunto, quienes le han manifestado que aceptan muy complacidos, el proyecto de la mayoría de la comisión y que no están de acuerdo en forma alguna con el proyecto del señor diputado Carlés.

Sr. Bas—¿Me permite una interrupción?...

La comisión tiene la conformidad absoluta de todos los representantes de los empleados; no la mayoría de la comisión, sino la unanimidad de la comisión, que se ha expedido en este asunto.

Sr. Carlés—¿Me permite que yo, a mi vez, agregue otro dato?

En los archivos de la secretaría hay una solicitud suscripta por cincuenta y un mil empleados, aceptando lisa y llanamente el proyecto del diputado Carlés.

Sr. Bas—Será la idea del señor diputado Carlés.

Sr. Carlés—El proyecto.

Sr. Bas—Pero una vez que la comisión concretó su pensamiento, puedo yo garantizar, bajo la fe de diputado, que todos los empleados de ferrocarril, por medio del órgano de sus representantes, han manifestado su absoluta conformidad con el despacho de la comisión.

Sr. Carlés—Sin invocar fe ninguna, me refiero a los antecedentes que existen en los archivos de la secretaría.

Sr. Presidente—Sírvanse los señores diputados no interrumpir al orador. Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Gómez (C. F.)—Pero suponiendo que todo esto no fuera así, y que todas estas graves cuestiones tuvieran que tratarse ahora, yo voy a dar las razones concisas y concretas que me deciden a votar por el despacho de la comisión de legislación.

Alarmado, señor presidente, sobre el porvenir del fondo de la caja nacional de pensiones y jubilaciones, cuando el señor diputado Carlés presentó su proyecto, me puse inmediatamente a recoger antecedentes y datos

para poder decir a la Cámara cuál era mi pensamiento en esta cuestión, y pedí que, sobre los 107.910 empleados de las empresas de ferrocarriles, se me calculara el término medio del sueldo anual, el término medio de la jubilación, que es, según el proyecto, el noventa y cinco por ciento del sueldo, en el supuesto de que el actual personal tuviera ya diez años de servicios y que dentro de quince, es decir, a los veinticinco años de servicios que fija el proyecto del señor diputado Carlés, se jubilara el treinta y tres por ciento del personal actual, haciéndose igual cálculo para el caso que lo hiciera el sesenta y seis por ciento. Y resultó lo siguiente: que el valor de las jubilaciones probables futuras, sobre el treinta y tres por ciento del personal y sobre el sueldo medio de 1.086 pesos por año, acordándose las jubilaciones por el noventa y cinco por ciento, es de pesos 232.120.000, término medio, y de pesos 464.240.000, moneda nacional si se jubilara el 66 por ciento del personal. Resulta también que el valor de los diez años de servicio del personal de los ferrocarriles asciende, según estos cálculos matemáticos, a 75.729.000 pesos moneda nacional. Y yo digo: ¿estamos en condiciones de incorporar a la caja este numeroso personal de ferroviarios, empezando por reconocerles estos 75.000.000 que importan los servicios de años acumulados?

No, señor presidente.

El señor miembro informante ha demostrado de una manera concluyente, a mi modo de ver, que la situación actual del fondo de la caja nacional de jubilaciones es muy comprometida. Habría sido comprometida, sin duda alguna, aun si no se hubiera modificado la ley primitiva, por cuanto la comisión de legislación, en 1901, me encargó que informara el despacho, y yo anticipé que presentábamos una ley de ensayo, que, para poder garantir al país que fundábamos una institución permanente, el pensamiento de la comisión hubiera sido presentar un proyecto de ley que no permitiera la jubilación sino a los sesenta años de edad, y que no se pudiera dar como jubilación sino el 60 por ciento del término medio de los sueldos durante los últimos cinco años; que sólo a esa

condición podríamos fundar una institución estable.

Pero las reformas introducidas posteriormente a la ley de la caja, según las opiniones del señor ministro de hacienda, que me voy a permitir leer, correspondiente a los últimos dos años, según opiniones de todos los técnicos que han estudiado la cuestión, y según la muy autorizada opinión del señor miembro informante de la comisión de legislación, está comprometida la situación de la caja y estamos abocados, en tiempo más o menos corto, a una crisis de esta institución.

Dice la memoria del Poder Ejecutivo correspondiente al año 1910: «La caja nacional de jubilaciones y pensiones es una grande y benéfica institución; ella pertenece propiamente a los empleados civiles de la administración nacional, a quienes asegura su vida y la de su familia. Parecería así que los mismos empeñados en sostenerla fueran los mismos empleados. Sin embargo, por empeños de muchos de éstos, la ley primitiva ha sido reformada cuatro veces, y cada una de las leyes de reforma ha sido un atentado contra la vida de la misma institución.

«Los estudios hechos por su director, como los estudios científicos, mandados practicar por el ministerio, demuestran que la caja está amenazada de muerte, de ruina completa en un tiempo más o menos próximo. Se trata de un organismo muy complicado, en que los recursos deben satisfacer siempre sus erogaciones, según cálculos matemáticos de probabilidades».

«Ahora bien: esas cuatro leyes, dictadas ciegamente y sin estudio, han venido a acrecentar de tal modo las erogaciones de la caja y a disminuir sus entradas, que el equilibrio se ha perdido, y esa institución lleva hoy en su seno el germen infalible de su ruina».

De modo que, comprometer todavía más la existencia de la caja de jubilaciones, arrojándole este peso enorme de las jubilaciones ferroviarias, es no sólo imprudente, es en mi concepto, un verdadero absurdo, que no puede votar la Cámara.

El mismo señor ministro de hacienda repite su opinión en la memoria correspondiente al año 1911, y el presidente

de la caja nacional de jubilaciones, hablando más concretamente de los efectos de la última reforma sancionada, referente al término que debe servir de base para el monto de las jubilaciones, dice en la última memoria, refiriéndose a 1911: «El expresado año se ha distinguido, entre los precedentes, por la gran afluencia de solicitudes de jubilación con el tiempo mínimo de servicios exigido por la ley».

«En el solo año 1911 fueron acordadas 379 jubilaciones; más del doble de las concedidas en 1910, que fueron 178; más del triple de las del año 1909, que fueron 109, o del año 1907, que fueron 121; más del cuádruplo de las del año 1906, que fueron 91; más del septuplo de las del año 1905, que fueron 50; y, por último, más que las de los años 1904, 1906, 1907 y 1909, reunidas».

«Apenas aparecen ya cómputos con más de treinta años de servicios, y entre los que solicitan su jubilación, ya no se ven, como en otro tiempo, viejos empleados con 60 y más años de edad, y hasta escasean los que alcanzan a 50».

«En cambio, abundan los cuarentenarios, y hasta hay algunos que no alcanzan a esa edad. Se nota un evidente apuro en jubilarse».

Y bien, señor presidente: yo sostengo, manifestando en esto un poco de disconformidad con las opiniones del señor miembro informante de la comisión, que la más grave de las reformas introducidas a la ley de jubilaciones no es precisamente la referente al promedio de los últimos dos semestres del sueldo de los empleados, sino la que se refiere a que no sea necesario absolutamente edad alguna para jubilarse.

No se puede sostener seriamente, en una materia de tanta trascendencia, que sea posible hacer cálculos sobre las obligaciones futuras de una caja de jubilaciones sin que se parta, como de una base inconvencional, de la edad a que los empleados puedan acogerse a la jubilación, porque estas instituciones de previsión, que se fundan, en cierta manera, en el funcionamiento del seguro mutuo, obedecen a reglas matemáticas inflexibles. Y aquí quiero referirme, señor presidente, a una especie de protesta que me parece que por dos o tres veces ha insinuado el señor diputado autor del pro-

yecto, que no puede dudar de la profunda simpatía con que siempre me he honrado en acoger sus iniciativas; la especie de protesta que me parece que ha formulado contra el propósito de la comisión, de hacer estudiar el proyecto del señor diputado por una comisión de técnicos.

El nos decía: ¿qué nos van a traer los sabios?

Pero, señor presidente, en estas materias, todo, todo absolutamente está sometido a la alta matemática.

¿Y qué sería?...

Sr. Carlés—No exagere mi argumentación, señor diputado.

He dicho: ¿qué traerán esos sabios sobre los puntos a que se refiere el proyecto? Mientras no se expida esa comisión y no se dicte esta ley, lo que se propone ahora es tan inútil como ineficaz. Será tanto como ofrecer a un sediento el agua de una fuente que una academia de hidrógrafos descubrirá?

No niego la autoridad de los sabios, como parece que el señor diputado pretende hacer creer.

Sr. Gómez (C. F.)—Me alegro mucho de haberle interpretado mal.

Sr. Carlés—De haberme oído bien me hubiera evitado la interrupción.

Sr. Gómez (C. F.)—Pero, en todo caso, el señor diputado se opone a que una comisión científica estudie las bases de un proyecto de ley general.

Sr. Carlés—No; que estudie la fórmula del cuestionario de la comisión. Nada más.

Sr. Bas—Precisamente, señor diputado; son las bases de la jubilación.

Sr. Carlés—Me disculpará, señor diputado: no le he oído. Estoy contestándole al señor diputado que tiene la palabra.

Sr. Bas—Y yo al señor diputado.

Sr. Gómez (C. F.)—Yo digo, señor presidente, que todas las instituciones de previsión y de seguros del mundo, están fundadas sobre la vigilancia y la fiscalización. ¿Qué sería si esas instituciones no estuvieran constantemente vigiladas por la más escrupulosa fiscalización científica?

Hace un momento, estaba leyendo una memoria sobre el desarrollo colosal del departamento de seguros de Alemania, que cuando se organizó fué saludado por el mundo como una concepción

monstruosa, discutido por todos los especialistas y rechazado por la mayor parte de las opiniones de afuera. Desde 1895 hasta 1904, el departamento de seguros obreros de Alemania ha recibido cerca de 7.000 millones de marcos, y ha invertido, por accidentes, enfermedades e invalidez, más de 5.000 millones, teniendo a fines de 1904 un activo de 1.500 millones de marcos.

Cuando se ha llegado a este resultado, es precisamente porque la ciencia de los financistas alemanes ha podido, con medidas de verdadera prudencia y previsión, formar esta masa enorme de capitales en beneficio de toda la clase obrera de Alemania.

Y lo que entonces fué discutido por los especialistas y rechazado por ciertos parlamentos en nombre de la libertad individual, comprometida porque se fundaba sobre la base del seguro obligatorio, ha sido admitido después por la libre Inglaterra y por la celosa Francia.

Y de estos siete mil millones de marcos, el gobierno alemán no ha contribuido durante diez años sino con 340 o 350 millones. No recuerdo bien la cifra, porque se me ha perdido el papel en que había apuntado apresuradamente el dato. Todo lo demás ha sido dado por las empresas, por los patrones y por los obreros.

Bien, señor presidente: refiriéndome de nuevo a la cuestión de la edad, y recordando lo que dije cuando informé la ley, yo sostengo que para funcionar una ley de jubilaciones sin edad, hubiera sido preferible seguir bajo la ley anterior, que fijaba para jubilarse la edad de sesenta años.

Estas leyes de tanta trascendencia social y moral, no pueden producir sino deplorables trastornos cuando se facilita grandemente la jubilación. ¿Qué es lo que sucede, según dice la caja nacional de jubilaciones? Que la mayor parte del personal de la administración se está jubilando con cuarenta y tantos años de edad, siendo muy raros los que tienen cincuenta. Yo sostengo que es una inmundicia privar a la Nación de servidores en pleno uso de sus facultades, llenos de vida, cuando pueden seguir prestando todavía grandes servicios al país y a la administración. Esto es simplemente una inmundicia y un mal ejemplo.

La ley de jubilaciones se ha convertido en una ley de holgazanería, casi de beneficencia, en una ley inmoral. Si se publicaran dos docenas de nombres de personas que se han acogido a la jubilación con los mayores sueldos, habría realmente en el país un sentimiento de verdadero asombro.

Sr. Justo—¿Por qué no los dice el señor diputado?

Sr. Gómez (C. F.)—El señor diputado puede pedirlos. Por mi parte, yo conozco dos casos de condiscípulos míos, que creo que tienen la suerte de ser menores que yo ..

—El señor diputado Castillo hace una observación en voz baja al orador.

Sr. Gómez (C. F.)—Y yo acabo de pasar, señor diputado, el paralelo 45 de latitud sur. Voy hacia la región de los fríos. Pero me parece que sin modestia puedo confesar que todavía puedo prestar a mi país algunos útiles servicios.

Esos dos condiscípulos míos se han jubilado con grandes sueldos, probablemente con menos de 45 años de edad, en la plenitud de sus fuerzas físicas. Y como estos casos, y en peores condiciones, hay seguramente numerosos empleados de la administración. No les hago cargo alguno, porque han hecho uso de su derecho. El mal está en la ley.

Esto, repito, es un espectáculo altamente inmoral, que no puede permitirse que continúe en una ley de tanta trascendencia como lo es la de jubilaciones.

Y bien, señor presidente: una ley que tiene este defecto fundamental, ¿puede dar lugar a que se le incorporen ciento siete mil empleados de los ferrocarriles, que serán trescientos mil dentro de pocos años para que en un plazo de veinte años, cuando se jubile el 33 por ciento del personal de ferroviarios, tengamos en la República, con los actuales pensionistas y jubilados, y con los futuros pensionistas de la ley civil—si hubiera de sancionarse el proyecto del señor diputado—para que tengamos, repito, con una población de 15 o 16 millones de habitantes, más de cien mil jubilados? Es un espectáculo que tiene que impresionar vivamente a la opinión.

Ninguna ley de las que están en vigencia en los ferrocarriles, ni la famosa ley de Alemania a que me he referido, deja de tener como condición esencial la condición de la edad. En Alemania, ningún seguro obrero se da a la persona que no está enferma, si no tiene sesenta años. Y ¿cómo es posible que nosotros propongamos al parlamento la jubilación del personal de los ferrocarriles a los veinticinco años de servicios, sin hacer distinciones?

Más que el aspecto financiero de esta cuestión, lo que me preocupa, lo que impresiona, es el aspecto moral. Yo no aconsejaré nunca, yo jamás concurriré con mi voto a la sanción de una ley de jubilaciones con disposiciones como ésta!

Recuerdo, señor presidente, que, con motivo de la ley del 87, que no exigía para la jubilación el requisito de la edad y que establecía en muchos casos el cómputo doble de los años de servicios, se produjo un gran movimiento, el año 98, dentro y fuera del parlamento. El presidente Roca mandó a este recinto a su ministerio, y el doctor Magnasco, fundando la necesidad de la reforma de la escandalosa ley del 87, que permitía que un hombre se jubilara a los cuarenta años, y antes todavía decía:

«De 25.000 pesos que apenas se pagaban en concepto de gratificaciones extraordinarias antes de dictarse la ley del 87, a los pocos días de su sanción el gasto subió a 100.000 pesos. Todos los empleados resultaron encarecidos a los 35 años de edad. Al año siguiente pagó 140, después 320, en seguida 432.000. Al poco tiempo no más, señor ¡que es una década! medio millón de pesos en concepto de las gratificaciones que él llamaba pensiones y 1.388.000 pesos en concepto de lo que llamaba jubilaciones. Y mientras subía apenas, como está en el día de hoy, a ciento cincuenta millones, es decir, se multiplicaba sólo por tres, las gratificaciones no se multiplicaban por tres, ni por 65, ni por 10, ni por 20 o 50, sino que se multiplicaban por 110. Me parece que esto era, como lo decía un célebre ministro inglés en ocasión análoga, llevar hasta la extravagancia la dispersión de la fortuna pública».

Bien, señor presidente: el Poder eje-

cutivo nacional, un año antes de sancionarse la ley actual de jubilaciones, envió un mensaje al Congreso, urgiendo la sanción de la ley. En ese mensaje manifestaba el Poder ejecutivo que tenía la esperanza, que tenía casi la seguridad absoluta de que diez años después de sancionada la ley no figuraría en el presupuesto ninguna partida para pensiones. La caja nacional de jubilaciones cargaba con el pago de ciertas pensiones de empleados públicos; y quedó reducida a 4.700.000 pesos la partida del presupuesto para pensiones.

¡Risueña esperanza, señor presidente! El anexo del presupuesto repartido ayer por la comisión consigna una partida de trece millones, ciento noventa y dos mil pesos para las pensiones y retiros del año actual. Quiere decir que ya en 1913, el país tendrá que soportar una carga de 18.000.000 en pensiones, jubilaciones y retiros. Y siguiendo en esta proporción, en 10 años más calculo que el país y la caja de jubilaciones tendrán que pagar, sin incluir el personal de ferrocarriles, cuarenta millones de pesos!

¿Sabe la Cámara cuánto importaba el total de los sueldos de todos los empleados de la administración cuando se dictó la ley de pensiones, jubilaciones y retiros?

En 1901, todo el personal de la administración ganaba 32.904.832 pesos. Y tales datos numéricos, que no podrán ser rebatidos, son los que del punto de vista financiero y económico aconsejan dictar estas leyes con la más grande sabiduría, con la mayor previsión, con una prudencia que no será jamás exagerada.

De manera que en diez años de existencia de la ley, y en diez años más que se siga acordando pensiones y jubilaciones, vamos a tener que gastar cuarenta millones de pesos, es decir, casi ocho millones de pesos más que lo que importaba en su totalidad el presupuesto de la administración para 1901, en concepto de sueldos de empleados.

Lo que se impone, señor presidente,—ahora que me parece que hay una especie de reacción, dentro de la Cámara y fuera de ella, contra la facilidad para obtener una jubilación y para evitar el goce de pensiones,—es volver a las disposiciones de la ley primitiva. Debo confesarlo con franqueza, he tomado la pa-

labra no sólo para apoyar el dictamen de la comisión de legislación, a fin de evitar que se produzca algo que yo reputo un atentado contra la caja de jubilaciones y pensiones, sino también porque he querido aprovechar el momento actual para proponer a la meditación de la comisión de presupuesto, con motivo de la partida de trece millones de pesos a que llegan las pensiones civiles, si no es el caso, cuando discutamos el presupuesto para el año corriente, de incorporar a él nuevamente el artículo 54 de la primitiva ley, que ponía un freno a la liberalidad con que el Congreso vota anualmente las pensiones.

Aceptando las opiniones científicas en que se apoya el señor ministro de hacienda y las manifestaciones de la comisión de legislación, que denuncian al país el hecho gravísimo de que la caja de jubilaciones y pensiones está avocada a una crisis próxima, debido más que todo a las reformas introducidas a la ley, hago un llamado a la sabiduría del señor presidente de la Nación y a la prudencia y celo con que el actual ministro de hacienda quiere cuidar el tesoro de la Nación, para pedirles desde esta banca de diputado que se mande suspender los efectos de la ley de jubilaciones para todos aquellos empleados que no hayan cumplido 55 años de edad, y hasta que el Congreso se ocupe de revisar la actual ley de jubilaciones, una vez que se expida la comisión que esta Cámara nombró, precisamente para estudiar el problema que yo presenté hace dos años.

Como noto que la Cámara está fatigada...

Varios señores diputados—¡No! ¡No!

Sr. Gómez (C. F.)—... terminaré diciendo que, en mi opinión, la Cámara debe votar tranquila el despacho de la comisión de legislación: que ese despacho no envuelve absolutamente ningún peligro; que no se puede argumentar diciendo que él significa simplemente aplazar la cuestión: que no ganará el país ni los empleados de los ferrocarriles con que sancionemos una ley que no tendrá duración sino de unos pocos años y que herirá profundamente el organismo de la caja de jubilaciones.

Para mí, señor presidente, es de toda evidencia, y no resiste al más ligero

análisis, que es imposible, con los recursos que da el proyecto del señor diputado Carlés, hacer el servicio de las jubilaciones futuras del personal de los ferrocarriles.

Adhiero muy complacido a todos los fundamentos con que el señor miembro informante de la comisión ha presentado este despacho a la consideración de la Cámara, y me es muy grato tributar todo mi aplauso al discurso que ha pronunciado, que es, realmente, de un hombre de gobierno.

He dicho.

Sr. Carlés—¿Me permite el señor presidente? No me vaya a salir con el reglamento. Necesito rectificar, porque el señor diputado me ha puesto en el caso de que rectifique.

Sr. Presidente—Puede rectificar el señor diputado.

Sr. Atencio—Se puede declarar libre el debate.

Sr. Presidente—Tiene derecho a hablar el señor diputado, como autor del proyecto.

Sr. Carlés—Todas las lamentaciones que acabamos de oír al autor del proyecto primitivo de jubilaciones nacionales tienden a demostrar los inconvenientes de las modificaciones que se han hecho a la ley primitiva.

Nada tiene que hacer con esas modificaciones mi proyecto, cuya disposición primera dice textualmente: «Queda comprendido el personal de los ferrocarriles de empresas particulares en las disposiciones de la ley 4349 en lo referente a jubilaciones de funcionarios, empleados o agentes civiles de la Nación.»

No hago referencia ninguna a las leyes complementarias, que son las que han puesto en la triste situación en que se encuentra a la caja nacional de jubilaciones. De suerte que todo lo que se ha dicho, podría tener por fin pedir la derogación de todas esas leyes complementarias y ser el mejor fundamento de mi proyecto.

Ahora paso a contestar las cifras dadas por el señor diputado, que son bastante sugestivas.

Mi proyecto significa un aporte a la caja nacional que engrosará enormemente el fondo que actualmente ella tiene acumulado.

Acaba de decirnos el señor diputado,

que actualmente se paga por las empresas, término medio, por empleado, 1.100 pesos, y que son 130.000 los empleados en los ferrocarriles de la República. Tenemos, pues, 140 millones de pesos que se invierten en sueldos pagados anualmente a los empleados de ferrocarriles. Con el descuento del cinco por ciento, siete millones, será el aporte de los empleados, más siete millones que corresponderá aportar a las empresas. Y como en el proyecto de la comisión, también se establece que la mitad del sueldo del primer mes se incorporará a la caja, y siendo doce millones los que se pagan mensualmente, corresponderán a la caja seis millones de pesos. A diez millones de pesos llega a ser lo que existe actualmente en las cajas de los ferrocarriles como pertenecientes al fondo de pensiones. Tenemos, además, los otros recursos que propone la comisión: como sobrecargas, que da, término medio, según acaba de manifestar el señor diputado, un millón anual, lo que importa para la caja un millón más, y 500.000 por pasajes.

Resulta, pues, que los empleados de ferrocarriles van a aportar a la caja 31 millones de pesos.

Esta es la razón por qué nosotros podemos determinar 25 años, dentro de los propósitos humanitarios, tan ardorosamente y con tanta elocuencia expresados por el distinguido presidente de la comisión. Y al precisar ese término del servicio para ampararse de la jubilación, lo he hecho sobre la base de los recursos jubilatorios y del estudio estadístico-fisiológico del desgaste de la fuerza humana aplicada al empleo en la actividad ferroviaria.

El proyecto originario se informó en la legislación vigente, aceptó su jurisprudencia, se adaptó a sus modalidades y allanó todos los obstáculos que pudieran impedir su confirmación con la norma de la ley aplicada durante 15 años. Se guió por los antecedentes que observaron los empleados ferroviarios de las líneas de la Nación, del Consejo nacional de educación y del Banco de la Nación y del Hipotecario, al incorporarse respectivamente a los beneficios de la caja nacional, aceptando las condiciones generales de la ley que estatuyen las jubilaciones y pensiones de la Nación. Además, se pensó que se inicia-

ba la era de la asistencia del Estado en el socorro del empleado particular, cuyo fin caracteriza la civilización de la sociedad y realiza el ideal de solidaridad sobre la base del mutualismo entre todas las personas de una misma agrupación. Hoy se organizaba el amparo de los ferrocarrileros, para continuar después con los tranviersos, los bancarios, los comerciales, etc., como felizmente se preparaban éstos a acogerse al beneficio, empezando ellos por agremiarse.

La comisión ha desdeñado considerar esos antecedentes. Proyecta la formación de una caja especial, autónoma, privada, con reglamentación típica, separada de la caja nacional, y sobre bases y condiciones que una futura ley determinará, allá cuando el Congreso lo dispusiera. Supongo que los autores de la reforma no pretenderán imponer a las legislaturas futuras el plazo dentro del cual ellas dictarán la ley sobre la caja de montepío de los ferrocarrileros de la República.

Entretanto, se complica con esa legislación especial la ejecución de una idea eminentemente nacional, obstaculizando con excepciones reglamentarias la generalización del amparo social y oficial, aplicado a los empleados particulares. Se miraría con seriedad las innumerables cajas de montepío correspondientes a los innumerables gremios de empleados en las actividades económicas del país: caja para éstos, con su ley especial; caja para esos, con su otra ley especial; caja para los de más allá, con su tercera, centena o millenaria ley especial. Son tan manuales las instituciones de la legislación extranjera, que han agrupado millones de amparados, bajo la égida de una sola institución sometida a una única legislación, que resulta extravagante el pensamiento de legislaciones multiformes en esas materias, de suyo simplistas.

La multiplicidad de las cajas de montepío oficiales, con legislación multicolor, enredará la solución del problema administrativo del presupuesto, que por corruptela ha tolerado que un solo y regular servicio sea desordenadamente distribuido en varias partes.

Así aparecen archivos, contadurías, estadísticas, etc., en cada uno de los ministerios, que entorpecen la regulari-

dad de su servicio en la repartición central.

Esa exclusión de la caja de ferrocarrileros de la ley general, significa excluir a esos empleados de los beneficios que entraña su sometimiento a esta ley. Por eso el proyecto originario, al consagrar la incorporación de esos empleados a la institución general, les consagra empleados nacionales; y así como la ley define los derechos, las obligaciones del empleado, así el proyecto originario define los derechos y obligaciones de los ferrocarrileros. El proyecto de la comisión no considera esa circunstancia.

Entre la dignidad que mi proyecto otorgaba al ferrocarrilero, de titularse empleado público, o lo indefinido al respecto de la reforma; no hay cómo vacilar.

Como si esa consideración administrativa no fuera bastante, la formación de la caja de jubilaciones ferrocarrileras significa, además de un régimen complicado, un aumento inútil de gastos. Con los 120 mil empleados de los ferrocarriles, con la administración del futuro tesoro de esa caja, tanto o mayor que la nacional, los gastos de la caja especial serán tanto o más que los de aquella. La nacional eroga por gastos de administración, 220.000 pesos. Esta misma suma de 220.000 erogaría la caja especial de los ferrocarrileros, que gravitaría sobre su tesoro, formado por sus propios emolumentos, un gasto inútil, pesando penosamente sobre un descuento doliente, gasto que nada justifica, por lo mismo que nada justifica la separación de una caja de la otra.

He concluido. (*Manifestaciones de aprobación en las bancas*).

Sr. Bas—¿Si me permite el señor presidente una rectificación a la rectificación del señor diputado?...

Por los datos que tengo a la vista, suministrados por las propias empresas, puedo afirmar, ratificando lo que dije en la sesión anterior, que el sueldo de los empleados de las empresas nacionales alcanza a la cantidad de cincuenta millones de pesos, y que, por consiguiente, está muy lejos de llegar a 130 millones. Están a la disposición de los señores diputados todos los informes presentados por las empresas y firmados por los gerentes respectivos.

Sr. Ministro de obras públicas—Pido la palabra.

En la sesión pasada, cuando tuve el honor de ser avisado por la honorable Cámara de que se iba a tratar esta cuestión, era ya una hora algo avanzada y me había retirado de mi despacho. Debido a esa circunstancia no me fué dado aceptar el honor que se me hacía, invitándome a concurrir a esa reunión. Me he creído, por lo tanto, obligado a concurrir a la actual, para manifestar, en lo poco que puedo hacerlo, la opinión del Poder ejecutivo sobre el asunto que está a discusión, o, más bien, para explicar a la Cámara y al país que el Poder ejecutivo se ha interesado muy vivamente por esta cuestión desde mucho tiempo atrás. Por lo pronto, lo prueba el hecho de haberla incluido entre los primeros asuntos objeto de la convocatoria a sesiones extraordinarias y, además, la circunstancia de que estaba ya para dictarse un decreto organizando la reglamentación del trabajo de los empleados de los ferrocarriles cuando el señor diputado por la Capital, doctor Carlés, tuvo la feliz inspiración de llamar la atención de la Cámara y del país sobre tan grave asunto, presentando el proyecto que la Cámara conoce.

Tanto el señor presidente de la Nación como el ministro que habla creyeron que era un deber elemental de consideración hacia el parlamento abstenerse de entrar, por medio de la reglamentación de leyes existentes, a resolver en los hechos una cuestión que el parlamento se avocaba, y quedó postergada la resolución respecto de ese decreto reglamentando el trabajo, hasta que se dictara por el Congreso la ley de la materia, a la cual el reglamento del Poder ejecutivo debería en su oportunidad amoldarse.

En esta situación de expectativa se encontraba el Poder ejecutivo durante el tiempo en que la comisión se dedicó al estudio completo y serio de la materia, esperando que llegara la oportunidad, para ocuparse de él, de que su representante fuera invitado a sus reuniones. Pero el tiempo pasó, y ese hecho no se produjo hasta los últimos días, hace poco tiempo, en que ya tenía preparado y hecho el despacho que ha presentado

a la honorable Cámara, en que tuvo el honor de ser invitado a una reunión.

Sr. Padilla (E. E.)—¿Me permite el señor ministro una breve interrupción?...

Desearía aclarar este incidente, por que quiero dejar constancia de que cuando el señor ministro fué llamado a la comisión, ésta no tenía preparado su despacho.

Por la forma en que ha debido ser tramitado este asunto, había encargado a una subcomisión de su seno, como lo ha informado el señor diputado por Córdoba, para que acumulara los antecedentes necesarios, y con los antecedentes reunidos por esa subcomisión fué que la comisión en pleno asumió el estudio de asunto, siendo sobre ese anteproyecto que tuvo lugar la discusión en la comisión, a que el señor ministro de obras públicas fué invitado.

Desearía dejar aclarado este incidente.

Sr. Ministro de obras públicas—Bien señor presidente: debo rectificar en honor de la verdad. No conocía esa distinción a que acaba de referirse el señor presidente de la comisión; pero el hecho no cambia absolutamente las circunstancias, porque la subcomisión había presentado ya su proyecto, el que, si no me equivoco también en esta afirmación, es muy parecido al mismo que la comisión ha adoptado y que está a la consideración de la Cámara.

Sr. Bas—¿Me permite?...

La subcomisión pensó desde el primer momento invitar al señor ministro, pero después creyó que no estaba en sus facultades hacer una invitación a un miembro del Poder ejecutivo, por no representar directamente a la Cámara. Y es en ese concepto que no fué invitado el señor ministro a concurrir a su seno.

Sr. Ministro de obras públicas—Quiero dejar constancia, ante todo, de que está muy lejos de mi intención y de mi propósito hacer ningún cargo a la comisión, como tampoco a la subcomisión. Me refería al hecho, para manifestar lo que voy a decir.

El Poder ejecutivo no ha intervenido en el estudio del asunto, por una razón o por otra, repito, sin que ésto importe hacer un cargo que no está en mi ánimo hacer, y que no tendría tampoco el de

recho de formular a la comisión. Me refiero a los hechos.

Bien, señor presidente: asistí a la primera de las reuniones a que fuí invitado, y no había número; sólo concurrieron cuatro de los nueve miembros que componían la comisión. Me limité a oír las informaciones que se me hicieran, puesto que el Poder ejecutivo no podía dar la suya sin antes conocer de lo que se trataba.

Comuniqué al señor presidente de la Nación lo que había escuchado de los señores miembros de la comisión allí presentes, y concurrí al día siguiente a una nueva citación; pero, desgraciadamente, en esa segunda reunión hubo menos número, porque estaban solamente presentes el señor presidente, doctor Padilla, y el señor diputado por la Capital, doctor Palacios.

No hubo, pues, ocasión de que entrara el Poder ejecutivo al estudio de la cuestión; pero conversamos privadamente, puedo decir, porque no estaba constituida la comisión, sobre estos puntos, y tuve oportunidad, entonces, de explicarles cuáles eran las ideas básicas, diré así, del Poder ejecutivo, sobre la materia.

Algo más: hice pedir inmediatamente el proyecto que estaba preparado por el Poder ejecutivo, reglamentando el trabajo de los empleados de los ferrocarriles, y lo puse enteramente a disposición de la comisión. Fuimos más lejos con los señores diputados a que me he referido, y nos pusimos a conversar sobre la posible amalgamación del proyecto de la subcomisión, en la parte que se refiere a la jubilación, con el proyecto de decreto que tenía el Poder ejecutivo. Y, con ese motivo, entramos en consideraciones que, desgraciadamente, no llegaron a ningún resultado, porque la primera noticia que tuve de la comisión fué que el despacho estaba concluido y firmado.

Es así, repito, cómo el Poder ejecutivo no ha tenido el medio y la oportunidad de estudiar esta cuestión tan ardua y complicada de la jubilación ferroviaria.

Debo agregar, como representante del Poder ejecutivo, que sólo podía ocuparme de la parte que se refiere a los empleados y régimen de los ferrocarriles.

sin poder entrar muy hondamente en la cuestión financiera que envuelve la creación de una caja de pensiones y jubilaciones, porque a ese respecto no era el ministro de obras públicas el órgano del Poder ejecutivo, ni lo es en este momento, sino el ministro de hacienda, el que debía tratar de una cuestión que le corresponde, en la división de las atribuciones de los distintos ministerios, como director y jefe de las finanzas.

Este proyecto, señor presidente, se propone dictar una ley de excepción; de excepción, digo, porque no abarca la jubilación de todos los obreros y de todos los empleados de las diversas industrias; se limita a ocuparse de los empleados ferroviarios, y este caso de excepción debe responder, evidentemente, a una situación también de excepción, como efectivamente es así.

Pero no se ha dicho en esta Cámara, según la versión taquigráfica, que he leído, cuál es la causa que mueve al Parlamento y al Poder ejecutivo a ocuparse de esta cuestión de los ferroviarios con especialidad, y con prescindencia de los otros empleados y obreros de las demás industrias del país.

Es que estos empleados desempeñan en el Estado funciones completamente excepcionales. Son los encargados de verificar la circulación dentro del organismo nacional, y como tales no pueden gozar de las mismas ventajas, privilegios y libertades de todos los demás obreros cuyas funciones no afectan el organismo y la vida misma de la Nación.

Es esa razón de excepción la que hace que se refiera sólo a ellos el proyecto que se discute, sobre jubilación.

Y buena falta hace, señor presidente, que tal ley de excepción se dicte, porque es necesario acabar de una vez con toda posibilidad de que se repita, una vez más, la huelga que el año pasado puso en peligro la economía nacional.

Es a ese objeto que va esta ley, como tienen que ir otras, de la iniciativa del Parlamento o del Poder ejecutivo, para garantizar la situación de los obreros de los ferrocarriles, porque tenemos que convenir que, como tales, no pueden gozar de las mismas ventajas, privilegios y libertades de todos los demás obreros que entran a la huelga en defensa de sus intereses heridos. ¿Y por qué no pueden usar de ese derecho?

Porque no puede permitírseles, de ninguna manera, que hagan uso de él, porque ese derecho de huelga, ejercitado por estos obreros, afecta los más grandes intereses del país, puesto que, como he dicho antes, afecta a la vida misma del organismo, poniendo en peligro su circulación, o interrumpiéndola.

De acuerdo con estas ideas, que no son más, que son de todo el mundo, que han sido defendidas últimamente en la tribuna francesa por los representantes más caracterizados del partido socialista—Briand, Millerand, Viviani,—en discursos elocuentes, que los señores diputados conocen, verdaderos modelos en su género, en los que han venido a sostener aquellos mismos representantes del socialismo que, tratándose de servicios públicos, como los de los ferrocarriles, los empleados que desempeñan sus funciones en ellos no tienen el derecho de huelga.

¿Por qué, señor presidente? Porque no es un medio de defensa que se ejerce contra los que les producen los daños de que se quejan; es un medio que se ejerce sobre los inocentes, sobre los que no tienen la culpa de lo que pasa.

El derecho internacional, de tiempo atrás y en las últimas épocas, ha consagrado por resoluciones del congreso de la Haya, las leyes que se llaman de la guerra, y, entre otras reglas, ha establecido, fundándose en consideraciones de humanidad y de existencia misma para la vida de los pueblos, aquella por la que se declara que los beligerantes no tienen el derecho de perjudicar a los no combatientes, a los neutrales. Está prohibido envenenar fuentes; está prohibido—en fin, para no entrar en detalles,—todo aquello que puede hacer mal a las gentes que no están empeñadas en la contienda, que no son beligerantes y que, por consiguiente, no tienen la culpa de lo que pasa.

Y esta regla de humanidad, que se ha establecido para prevenir los excesos de la guerra entre pueblos distintos, ¿cómo no tenemos que admitir que son aplicables, en primer término, a las cuestiones que se producen dentro de un mismo pueblo, dentro de una misma organización humana?

¿Cómo es posible permitir a los empleados de los ferrocarriles, que tienen quejas, justas muchas veces, contra los

directores de esas corporaciones, que van a ejercitar, como dije antes, medidas de defensa contra los inocentes que no tienen culpa alguna? Esos obreros que reclaman para sí una situación preferente, o una situación mejor, por medio de una huelga, no sólo van a herir los intereses de los capitalistas, a los que no les perjudica mayormente una disminución transitoria en sus utilidades, van a herir, sobre todo, a esos obreros, a esos pequeños productores, que después de haber perdido consecutivamente sus cosechas durante tres y cuatro años, y que han logrado al fin, al cuarto o quinto, una gran cosecha, que pueden resarcirles de los perjuicios sufridos, se encuentran con que, en un momento dado, los empleados de los ferrocarriles, los maquinistas, se niegan a dirigir los trenes, y los granos se pudren en sus parvas, a las puertas de las mismas estaciones!

Eso no puede ser permitido. Ni aun del punto de vista de las ideas socialistas puede sostenerse que los obreros tienen el derecho para defenderse, de perjudicar a sus propios compañeros, que en mucho mayor número pueden sufrir y sufren las consecuencias funestas de estos movimientos. Esto no puede admitirse.

Al derecho de huelga se le reconocen estas excepciones, que han sido sostenidas en los últimos tiempos por los representantes más ilustres del mismo socialismo.

Con estas ideas, señor presidente, el Poder ejecutivo hizo todo lo que estuvo en su mano para evitar la huelga pasada. Desgraciadamente, no lo pudo conseguir, y la huelga se produjo. Sus directores, animados de las intenciones más pacíficas, todos ellos hombres de trabajo, hombres buenos, convencidos de que hacían un bien, dispuestos a mantener la huelga en el terreno pacífico, no pudieron, sin embargo, conseguirlo, y se produjeron hechos dolorosos, tristísimos, como aquél de una avanzada que se dió sobre un tren que llevaba 400 pasajeros a La Plata, tren sobre el que se hizo una descarga a boca de jarro, dejando la marca de siete u ocho proyectiles en la misma locomotora, cosa que vi con mis propios ojos y que me hizo calificar el hecho, con justa razón vuelvo a repetirlo ahora, como un acto

de piratería. Esta calificación no se refería, porque habría envuelto una gran injusticia, no se refería ni podía referirse, en manera alguna, a la actitud de los obreros que se declaraban en huelga pacífica, sino a la conducta de aquellos que, exagerando actitudes que no deberían nunca salir de ciertos límites, habían llegado hasta cometer crímenes. Y es a esos actos a los que yo me refería y que debían ser reprimidos con toda **energía**, porque el uso de un derecho legítimo como el que estaban ejerciendo, según ellos, no los autorizaba a llegar hasta el crimen.

He aprovechado esta oportunidad para explicar una frase que se ha comentado en su oportunidad y que me hacía pasar como un **enemigo**, enemigo de los obreros y contrario a todas sus reivindicaciones. No he sido contrario; he sido en todos los momentos favorable, y cada vez que han acudido a mi despacho los gremios obreros, he procurado satisfacerlos en la medida de mis medios, y he hecho mucho por apoyarlos, con la conciencia, no de que hacía un favor, sino de que cumplía un deber.

Bien, señor presidente: consecuente con estas ideas, entendía el Poder ejecutivo que si por las razones que he expuesto les negaba a los obreros el derecho de levantarse en huelga, porque los consideraba como funcionarios públicos, tenía el deber elemental de ampararlos, de apoyarlos y de protegerlos. Y fué inspirado en ese propósito, en ese concepto, que formuló el proyecto de reglamento de trabajo en los ferrocarriles, proyecto que los señores diputados a que me he referido, el doctor Palacios y el doctor Padilla, conocen.

Yo no sé si ese proyecto satisface todos los deseos y todas las aspiraciones obreras. Pero, forzoso será convenir en que están inspirados en un propósito real, franco y sincero, de beneficiar a los trabajadores en los ferrocarriles. Este proyecto, yo entendía que podía en alguna forma amalgamarse con el despacho de la comisión, para que no tuviese el inconveniente que le ha señalado el señor diputado Carlés, de que es un proyecto que no resuelve nada, cuando de la otra manera se habría resuelto mucho. Yo me fundaba en estas consideraciones, en que todos los defectos que pudiera tener la ley preparada

yecto que no estaba a la consideración de la Cámara, el del señor diputado por la Capital, doctor Carlés. En lo que yo llamaría el mismo defecto ha incurrido el señor ministro de obras públicas, que ha aprovechado la oportunidad de este debate para referirse a observaciones o a imputaciones que se le hicieran hace más de un año, referentes a la intervención del Poder ejecutivo cuando se produjo la huelga de los empleados ferrocarrileros.

Pero, señor presidente, ni estamos discutiendo el proyecto del señor diputado por la Capital, doctor Carlés, ni nos estamos refiriendo a la huelga ferrocarrilera. Las dos cosas deberán merecer la atención de la Cámara: la una, en cuanto se refiere a la necesidad de dictar una ley completa referente a esta materia, en vez de la ley proyectada por la comisión de legislación; y la otra, que supongo determinará un proyecto del Poder ejecutivo, sometido oportunamente a la consideración del Congreso, respecto de la necesidad de reglamentar, si es que ha llegado la oportunidad de hacerlo en el país, el ejercicio del derecho de huelga, sobre todo cuando ese ejercicio se practica por los empleados ferrocarrileros.

Yo voy a referirme al proyecto en discusión, en el que creo que la comisión de legislación, tan calificada que ha hecho vacilar mis convicciones respecto de la obligación que yo creo tener de intervenir en este debate abrumado ante el peso de ese prestigio...

Sr. Bas—¡Muchas gracias!

Sr. Atencio—...no ha hecho nada más que presentar a la Cámara, como dijo el señor diputado por la Capital, un proyecto que entraña una esperanza.

Sr. Bas—No ha leído el proyecto el señor diputado.

Sr. Atencio—Desgraciadamente, señor diputado, lo he leído.

Sr. Bas—Parece que no, señor diputado.

Sr. Atencio—Y por eso estoy en aptitud de hacerle estas observaciones.

En efecto, impresionada la comisión, como parecería que lo hubieran sido los que han intervenido en el debate recientemente, por el ambiente de la Cámara, y ella, a su vez, por el ambiente de la opinión, ha querido proponer al Congreso que dicte una ley que satis-

faga esta necesidad, reclamada por los ferroviarios, y ha presentado, en defecto del proyecto del señor diputado por la Capital, que ha considerado incompleto, un proyecto que, en mi sentir, es más incompleto todavía.

Desde luego, señor presidente, me parece que el parlamento argentino no puede dictar esta clase de leyes, en que resuelve parcialmente, y en una forma tan precaria, problemas tan fundamentales, que reclaman de una manera tan imperiosa la atención de todos los hombres de Estado, sobre todo de los legisladores.

Todos los oradores, todos los miembros de la Cámara que han intervenido en este debate, y el señor ministro, se han referido a este particular; todos ellos han aludido a la importancia del problema sobre las cajas de jubilaciones y pensiones y, sobre todo, a la importancia especial que tiene ese problema cuando se refiere a obreros y empleados de los ferrocarriles.

Parecería que los miembros de la Cámara, como los miembros del Poder ejecutivo, intentarían preocuparse y se hubieran preocupado de una manera especial de darle a este problema la solución que reclama; y, sin embargo, no han hecho más que criticar un proyecto que no estaba en discusión, o referirse a la cuestión en sus aspectos fundamentales, simplemente para decir que el estudio de la misma no había sido abordado.

En efecto, si la caja nacional de jubilaciones y pensiones está próxima a una catástrofe, si cada día se acentúa de una manera extraordinaria esa situación ¿remedia algo el Congreso dictando esta ley, presentada por la comisión de legislación, respecto de los obreros ferroviarios? ¿Dónde está el estudio que reclama esa situación y que parece que tanto la comisión como el ministro de obras públicas—es decir, el Poder ejecutivo—conocen absolutamente en todos sus detalles?

El proyecto de la comisión atendía a la aspiración de los empleados y de los obreros de los ferrocarriles. El proyecto del señor diputado Carlés, interpretando esos sentimientos, esa aspiración, y procurando dar una solución armónica, no solamente con ella y con los intereses generales, sino con la misma situación

de la caja nacional de pensiones y jubilaciones, intentaba solucionar la cuestión de una manera completa, en su faz fundamental, porque incorporaba a los empleados y obreros de los ferrocarriles a la caja de jubilaciones y pensiones.

Esa era la cuestión, eso era lo que reclamaban los obreros de los ferrocarriles; y por eso está en el archivo de la Cámara la solicitud a que ha aludido el señor diputado por la Capital. Pero la comisión, no queriendo satisfacer ese anhelo, por razones que me apresuro a admitir como legítimas, porque entendía que no convenía precipitar la crisis de la caja nacional, o porque le parecía que con incorporar a los empleados ferroviarios, aumentaba los inconvenientes de la misma; pero no animándose tampoco a resistir la presión pública, que le reclamaba la sanción de la ley de una manera inmediata, ha venido a proponer a la Cámara este proyecto de ley incompleto, en el que determina que para el porvenir se ha de resolver el problema de la jubilación y de la pensión de los obreros ferrocarrileros.

Desde luego, señor presidente, me parece que ni la comisión, ni la Cámara, ni el Congreso, podría emplazar a este mismo Congreso o al Congreso futuro para que dictara una ley de esta o de cualquiera otra naturaleza. Se explica que el pueblo, cuando ejerce una de las dos facultades que tiene, soberanas, —la de resolver directamente las cuestiones y la de resolverlas por intermedio de sus representantes,—cuando ejerce la primera, por ejemplo, diga al sancionar una constitución, que el Congreso futuro, el del año siguiente, o el Congreso que viene después de la vigencia de la Constitución, dictará tal o cual ley.

Y todos sabemos, señor presidente,—ya hayamos de referirnos a la Constitución nacional, como a las provinciales—que esas cláusulas, que vienen de origen tan respetable, no han sido, sin embargo, cumplidas, y aún subsisten en el orden nacional y en el orden de las provincias disposiciones de la Constitución que mandan dictar ciertas leyes que no se han dictado.

Luego, ¿cómo podríamos pensar que habremos de dar solución inmediata a

este asunto, emplazando al Congreso para que el año que viene dicte una ley completa? ¿Por qué no habríamos de tener el coraje de asumir la responsabilidad plena de nuestros actos, diciéndoles a los empleados ferrocarrileros: Señores, no se puede dictar por ahora la ley, porque no hay elementos bastantes de juicio?

Sr. Gómez (C. F.)—Eso es lo que dice el miembro informante de la comisión.

Sr. Atencio—Entonces, ¿para qué se crea una caja que no va a producir resultado alguno? Lo que los obreros ferrocarrileros reclaman, no es la creación de una caja; lo que exigen y reclaman es la jubilación y la pensión, que es lo que les interesa, venga ella de una caja particular o nacional. Por eso he dicho que la ley es una ley que da simplemente una esperanza.

Sr. Padilla (E. E.)—Pero, señor diputado, no se olvide que aquí no hay de por medio una exigencia de los empleados de ferrocarriles; aquí hay, puramente, el despacho de la comisión sobre la iniciativa parlamentaria del señor diputado doctor Carls. No hay exigencia de por medio, porque no ha podido existir en ningún momento, y porque la comisión no hubiera respondido a ella. La comisión ha considerado el asunto con su propio criterio, y de acuerdo con el que ha informado el distinguido miembro de esta Cámara, autor del proyecto.

Extraño, pues, que se use de las palabras «exigencias de los obreros», cuando, en realidad, no ha habido tal exigencia, ni la comisión, repito, se hubiera sometido a ella.

Sr. Gómez (C. F.)—Lo que existe es la manifestación clara de que los obreros aceptan la solución dada.

Sr. Padilla (E. E.)—Perfectamente. Pero eso es cosa muy distinta.

Sr. Atencio—Al iniciar mi exposición, decía que ella iba a ser sumamente breve, y lo será, sobre todo si cuento con la tolerancia de mis colegas para escucharme, dado que, a la presión que ejerce sobre mi espíritu la indudable calificación de la comisión de legislación, se agrega ahora la que ejercen sobre el diputado que habla algunos de los hábiles parlamentaristas de la Cá-

mara, sin tener la benevolencia bastante para darse cuenta de las dificultades con que yo tengo que luchar para abordar el estudio de una cuestión de esta magnitud, que ha sido presentada al conocimiento y resolución de la Cámara por una comisión del prestigio de la de legislación.

Rogaría, por consiguiente, a los señores diputados que tuvieran conmigo esa deferencia que yo y otros hemos tenido con ellos cuando han hablado sobre el particular, reservándose sus observaciones, cualquiera que sea el error en que yo incurra, para refutarme después que haya concluido.

Sr. Gómez (C. F.)—Pido excusa al señor diputado por la interrupción que le he hecho.

Sr. Padilla (E. E.)—Excúseme el señor diputado. Con mi interrupción no he tenido la menor idea de molestarlo.

Sr. Atencio—Es un pedido de benevolencia, dada la notoria inferioridad de mis aptitudes.

Sr. Presidente—Y la presidencia apoya el pedido del señor diputado. Puede continuar, señor diputado.

Sr. Atencio—Decía, señor presidente, que yo hubiera comprendido que la comisión aconsejara a la Cámara y que la Cámara resolviera la postergación de este asunto, por las razones a que la comisión aludía, y que están establecidas en uno de sus artículos, cuando posterga para el futuro la resolución definitiva de la cuestión. Eso hubiera sido más categórico, más valiente, más eficaz.

La comisión especial que nombrara el Poder ejecutivo, según el proyecto de la comisión, hubiera podido presentar a la misma comisión de legislación, y sin necesidad de esa comisión especial, la comisión de legislación hubiera tenido por sí misma, los medios bastantes para abordar el estudio completo de este asunto y presentar a la Cámara, en un período relativamente breve, que el señor ministro de obras públicas hacía reducir a días, una solución completa del problema.

Una circunstancia más existe para que yo tenga esta convicción, y es aquella a que el señor ministro de obras públicas ha aludido cuando ha dicho a la Cámara que todos los elementos de juicio habían sido reunidos ya por el Poder ejecutivo, que estaba en condi-

ciones de dictar un decreto, o de proyectar una ley para someterla al Congreso, en que resolviera, si no esta cuestión, en sí misma, todas las que se refieren al trabajo y a la labor de los obreros de los ferrocarriles.

Entonces, pues, señor presidente, ¿por qué no se habría esperado a reunir los antecedentes por el órgano de la misma comisión legislación, por el del Poder ejecutivo, o por el de la comisión especial que se crea por el proyecto, para someter a la Cámara una cuestión resuelta, en vez de limitarse, como se limita la comisión de legislación, a proyectar la creación de una nueva caja de pensiones, uno de cuyos más serios inconvenientes ha hecho resaltar el señor diputado por la Capital, doctor Carlés, cuando se refirió al costo de sostenimiento de la administración de la caja actual, costo equivalente, de seguro, al del sostenimiento de la administración de la caja futura?

Hubiera pensado yo que tal vez conviniera aceptar ese temperamento si no se pudiera adoptar pura y simplemente el que el señor diputado por la Capital doctor Carlés, autor del proyecto inicial, sugiera o suministraba a la Cámara. Todas las razones que ha dado el señor diputado por Santa Fe y el mismo señor miembro informante de la comisión de legislación, han sido aducidas, no para impugnar el proyecto del diputado por la Capital, ni para defender el proyecto de la comisión de legislación, sino para criticar la forma en que se ha desenvuelto la caja nacional de pensiones y jubilaciones. Porque ésa es la médula de la argumentación de los dos señores diputados: ellos se han limitado a decir que la caja nacional de jubilaciones y pensiones adolece de estos y aquellos otros inconvenientes; que las leyes complementarias, verdaderas leyes de despilfarro, verdaderas leyes de favor y de beneficencia, han venido a crear una situación perturbadora en su organismo; ellos se han reducido a decir que la situación financiera o económica de la caja se agravaba en su falta de equilibrio, en su desorganización, en una forma verdaderamente alarmante, y que dentro de muy poco tiempo esa caja iba a hacer crisis, obligando a la manifestación que hacía el señor diputado por la Capital, de que en la hipótesis de que

la caja nacional de jubilaciones y pensiones hiciera crisis, el Estado tendría la obligación ineludible de concurrir a su sostenimiento, ya fuera por un arbitrio o por otro.

Entretanto, señor presidente, el proyecto del señor diputado por la Capital soluciona, como antes decía, la cuestión de fondo, no la cuestión de forma.

Si la ley nacional que creó la caja de pensiones y jubilaciones y las leyes complementarias, que tanto la han desnaturalizado, tienen los gravísimos inconvenientes que los señores diputados y el señor ministro de obras públicas han manifestado, ¿cuál es nuestro deber? ¿Dictar una ley creando una caja particular de pensiones para los empleados y obreros de los ferrocarriles sin los inconvenientes de las leyes aludidas, o dictar una nueva ley para esta caja, o reformar las leyes existentes, o atender de inmediato, no limitándonos a señalar el peligro, sino yendo enérgica y resueltamente a corregir desde ya, los inconvenientes de la ley actual de la caja de pensiones y jubilaciones?

Entretanto, el cargo es injusto, porque el proyecto del señor diputado Carlés no aumenta los inconvenientes de la caja nacional de pensiones, o mejor dicho, los inconvenientes creados a la misma por las leyes complementarias; al contrario, en primer lugar, el proyecto del señor diputado por la Capital se referirá como él mismo lo ha dicho, al tomar hoy nuevamente parte en este debate, a la ley originaria, sin dar a los que van a ser beneficiados por esta otra ley los derechos que para los actuales jubilados o pensionistas han establecido las leyes complementarias.

Pero no es esa sola la defensa que puede hacerse del proyecto del señor diputado por la Capital; no es sólo en esa parte que, en vez de perjudicar a la caja actual de pensiones y jubilaciones, la fortifica, sino en el sentido de que le aporta nuevos recursos financieros. ¿Por qué no habría, por ejemplo, la comisión de legislación, aceptando la parte fundamental del proyecto del señor diputado Carlés, incorporado a los recursos de la caja nacional de pensiones y jubilaciones el fondo acumulado por las empresas y el impuesto a los pasajes? ¿Y en qué proporciones no se habrían au-

mentado los recursos actuales de la caja llevándoles estos dos recursos?

Por otra parte, no ya por la limitación establecida en el proyecto del señor diputado por la Capital, en cuanto sólo da derecho a los ferroviarios en la medida de la ley originaria, sino en cuanto es notorio, y a todos los señores diputados les consta, que si hay peligro en que estas leyes se desnaturalicen en el manejo de las mismas por la administración, en cuanto se establecen los detalles de favoritismo que tienden a elevar de una posición subalterna a un empleado para trasportarlo a una posición superior simplemente a los efectos de una jubilación inmediata, ese peligro no existe ni existirá cuando se trate de los obreros o de los empleados de los ferrocarriles particulares. Porque todos sabemos que las empresas ferrocarrileras, no por razones de orden moral, sino por razones de orden práctico, defienden el principio de justicia que informa el ascenso de sus empleados. No se presentarán, por consiguiente, esos peligros.

El señor miembro informante aludía —y aludía en una forma muy somera porque, como he dicho, su exposición, muy extensa y muy crudita, se ha referido principalmente a los defectos de la ley actual más que a prestigiar las disposiciones de la ley que propone— el señor miembro informante aludía en el curso de su exposición al inconveniente de incorporar a la caja nacional de pensiones y jubilaciones, formada por empleados de la administración pública que están sometidos de una manera directa a su vigilancia, a estos empleados ferrocarrileros, que no están en las mismas condiciones.

Pero el señor ministro de obras públicas ha venido a rectificar ese concepto, dando al empleado o al obrero de los ferrocarriles un carácter especial al dar la verdadera razón, que también había emitido la comisión en su informe, de la existencia de una sección especial para estos, que podría existir dentro de la caja, como existe respecto de los empleados del Banco de la Nación, a que aludía el señor diputado por la Capital, o del Banco hipotecario nacional, a que aludía el mismo señor diputado, o del magisterio, también referido por él. Porque siendo empleados

que tienen una índole distinta de los de la administración, no tengo para qué referirme a los empleados del magisterio, cuando están los empleados del Banco de la Nación, nombrados directamente por el directorio y destituidos por el mismo. Y cuando todos esos empleados pueden estar incorporados a la caja nacional de pensiones, por secciones de la misma, del mismo modo pueden estar incorporados a la caja nacional de pensiones los empleados y obreros de los ferrocarriles particulares y aún de los ferrocarriles del Estado, por medio de secciones de la caja.

Tampoco hay que olvidar este otro antecedente: que la comisión, eludiendo ese inconveniente de la ley, incurre en este otro: no incorpora a los empleados y obreros de los ferrocarriles particulares a la caja nacional de jubilaciones y pensiones; pero incorpora a ella a los empleados y obreros de los ferrocarriles a los empleados del Estado que sirven en los ferrocarriles.

Y esto, señor presidente, está demostrando que hemos debido ir francamente a la incorporación de los empleados y obreros de los ferrocarriles a la caja nacional de jubilaciones y pensiones, estableciendo sobre ella y sobre los empleados incorporados todas las medidas de precaución y de prudencia que la experiencia aconsejara y que el derecho permitiera. Porque el señor ministro de obras públicas ha aludido recién a una cuestión que tiene que examinarse, no solamente del punto de vista que él ha mencionado, sino de otro.

El señor ministro se ha referido al artículo 6.º del proyecto de la comisión, en que alude a los empleados de los ferrocarriles que tengan más de mil pesos mensuales de sueldo, diciendo que habría un grave inconveniente en lastimar derechos adquiridos.

Se le ha replicado, en mi concepto, en una forma no bastante meditada sobre el particular; porque el hecho de que la caja nacional nueva de pensiones o la caja anterior, si prevaleciera la idea del señor diputado Carlés, signiera pagando a los jubilados o pensionados de las empresas sus jubilaciones o sus pensiones, aun cuando ellas fueran de más de mil pesos mensuales, no habría eludido en absoluto el inconveniente

apuntado por el señor ministro, porque todos los empleados actuales de esas empresas, que han estado, o aportando una cuota, o teniendo un derecho a recibir una pensión o una jubilación con arreglo a su sueldo actual—y entre esos empleados, aquellos que tienen más de mil pesos de sueldo—se encontrarán en una situación diferencial, o más bien ilegal, cuando se sancione esta ley, porque habiendo tenido durante el tiempo que han sido empleados derecho a una pensión o a una jubilación de dos mil pesos, por ejemplo, la ley actual, diez o quince años después de ser empleados, vendrá a restringir ese derecho diciéndoles: No, ustedes no tienen derecho sino a una jubilación de mil pesos.

Además, señor presidente, todos los empleados y obreros de los ferrocarriles del Estado, que por la ley actual y sus complementarios están en una situación privilegiada, pero que para ellos es una situación de derecho, que no es posible modificar, ¿cómo van a quedar cuando se han incorporado a una institución que crea para ellos un derecho inferior?

La simple enunciación de estas cosas, está demostrando que el asunto no ha sido examinado en sus fases fundamentales, y que la comisión ha querido simplemente satisfacer un anhelo público. Y aquí voy a referirme a la manifestación que hizo el señor presidente de la comisión, cuando, al tomar de una manera demasiado literal mis palabras, aludía a la presión, a la imposición o a la exigencia de los empleados y obreros de los ferrocarriles sobre los miembros de la comisión para que se dictara esta ley.

Yo no me he podido referir, señor presidente, y desde luego no he querido hacerlo, a la presión directa que se ejerce yendo a pedir que se sancione una cosa y amenazando si no se hace; me refiero a la presión moral que ejerce esa enorme masa de gente y sus afines desparrramados en toda la República, al ejercitar todas sus facultades y todos sus medios para lograr una legislación que los favorezca. A esa exigencia es a la que me he referido; y los señores diputados, que habrán recibido, como yo, solicitudes verbales y escritas, que han leído los diarios y han visto la persistencia con que nos reclamaban la sanción de una ley de esta naturaleza, tienen que con-

venir conmigo en que la presión existe en que la exigencia era completamente real.

Ahora bien, sintiéndola nosotros en todas sus formas y en todos sus efectos, ¿hemos debido ir a la sanción pura y simple del proyecto del señor diputado Carlés? No es esa mi doctrina, señor presidente; no es ese mi criterio. De otra manera, ¿hemos debido salir de esta situación y—discúlpennme los señores miembros de la comisión—aparentar que damos una ley y no damos ninguna, o crear simplemente una caja que hará una jubilación cuando se haya dictado la ley orgánica que la permita? ¿Y en qué condiciones, señor presidente? ¿Cuándo se dictará esa ley? Esos empleados que van a comenzar a depositar desde luego sus cuotas, perdiendo también la perspectiva de la jubilación por las empresas, ¿ante quién van a reclamar el día que se encuentren con que han dejado de tener ese beneficio y no existe el que lo ha de substituir?

Pero nosotros, sin sentirnos demasiado presionados por esta exigencia, debiéramos abordar la solución de este problema yendo a su fondo, estudiando sus dificultades, que resultan más aparentes que reales, porque esta cuestión de las pensiones y jubilaciones, como la de los seguros obreros, a que se ha referido el señor diputado por Santa Fe, están resueltas de una manera común en todas partes del mundo. Nosotros tenemos precisamente la ventaja de poder adaptar, aplicándolas a nuestro medio y a nuestras circunstancias, las leyes de Alemania, de Francia, de Italia y hasta de España sobre el particular. Y entonces, señor presidente, ¿por qué no habría de hacerse? ¿Es una cuestión tan grave y tan difícil saber lo que se refiere a la edad en que se deben jubilar los empleados de los ferrocarriles, y, en general, los empleados de la administración? Parecería ésta una dificultad muy grande, si hubiéramos de juzgarla por el hecho de que, presentado el proyecto por el señor diputado por la Capital en julio, ha sido despachado por la comisión seis meses después, sin haber podido abordar los problemas en sus aspectos fundamentales, por haberle faltado elementos.

Pero, señor presidente, eso resulta, a

la vez, un argumento en contra de la posibilidad de que se dicte la ley permanentemente, la ley definitiva en breve plazo, como sería necesario para sancionarla. Si en seis meses la comisión, disponiendo de todos los elementos del Congreso y de todos los elementos del Poder ejecutivo, no ha estado en aptitud de presentar una solución completa del problema, ¿cuándo va a estar en aptitud de presentarla la comisión especial nombrada por el Poder ejecutivo? Y si esta solución, en vez de presentarse el año que viene, se trae dentro de dos años, ¿cuál será el criterio del Congreso, del nuevo Congreso, porque es muy posible que ocurra dentro de dos años lo que ya ocurrió el año pasado: que la renovación sea positiva, en el sentido de traer en su inmensa mayoría elemento nuevo a la Cámara?

Voy a terminar, señor presidente, manifestando el deseo de que la comisión de legislación, cuya buena voluntad es indiscutible, cuya laboriosidad no es posible poner en duda, porque tenemos una prueba de ella en esta y en otras muchas leyes que ha despachado, deponga una parte siquiera de ese amor propio que pueden sentir sus miembros respecto de este proyecto y acepte una idea conciliatoria, que, por ejemplo, consistirá en la adopción de la parte fundamental o básica del proyecto del señor diputado Carlés, llevando francamente a los empleados ferroviarios a la caja nacional actual de jubilaciones y pensiones, reforzada en sus finanzas o en su economía con los recursos que le aporta la comisión en su proyecto, logrando de esa manera, no sólo el objetivo que ella se propone, sino el que persiguen los empleados y los obreros de los ferrocarriles, a quienes no alcanza de un modo eficaz y positivo el precario recurso de la jubilación y de las pensiones de las empresas actuales, que ni todas las conceden, ni son bastante importantes como para subvenir a las necesidades de la familia de un obrero que ha perdido sus fuerzas y sus energías para seguir trabajando.

La adopción, pues, del proyecto del señor diputado Carlés, en su base fundamental, mejora el proyecto mismo con la incorporación de los artículos a que he aludido, y podría dar una solución justa y de equidad a este problema, en su

aspecto actual, sin perjuicio de que, reconociendo la buena intervención, el espíritu de laboriosidad de los miembros de la comisión, del señor diputado por Santa Fe y, desde luego, del Poder ejecutivo, que dice tener tantos elementos de juicio reunidos a este respecto, podría, en un plazo breve, mejorarse las condiciones en que se desenvuelva la caja de pensiones y jubilaciones y evitar para el futuro ese espectáculo a que se ha referido el señor diputado por Santa Fe, de que una masa inmensa de la población, en pleno vigor físico e intelectual estuviera amparada a las leyes de pensiones y jubilaciones.

He dicho.

Sr. Gómez (C. F.)—Pido la palabra.

Sr. Presidente—¿Para rectificar, señor diputado?

Sr. Gómez (C. F.)—El señor diputado se molestó porque le hice una rectificación amistosa. Necesito decir cuatro palabras.

El señor diputado ha manifestado que yo me he ocupado, no del proyecto de la comisión, sino del del señor diputado Carlés, que no está en discusión. Naturalmente, tengo que demostrar los inconvenientes del proyecto del señor diputado Carlés, para decir que lo que conviene aceptar es el proyecto de la comisión, que, aunque no resuelve todas las cuestiones fundamentales, resuelve *ipso facto* la formación del tesoro de la caja y establece ciertos derechos y obligaciones para los empleados ferroviarios.

Yo digo, señor presidente, que no estamos en condiciones de legislar sobre materias tan graves.

¿Sabe el señor diputado por Buenos Aires cuánto importan las obligaciones futuras de una caja como la proyectada para los empleados ferroviarios? No puede saberlo. ¿Por qué, señor presidente? Porque no se conoce ni el número de los empleados de ferrocarril, ni el sueldo que tienen. Estamos discutiendo cuánto ganan. El señor diputado Carlés y yo sostenemos una cosa, y la comisión sostiene otra.

Sr. Carlés—Pida las planillas, que están en poder de la comisión, y tendrá todos esos datos.

Sr. Bas—Aquí están a su disposición.

Sr. Carlés—Ya ve, señor diputado, que se las ofrece el señor miembro informante.

Sr. Gómez (C. F.)—Yo afirmo que las planillas dicen una cosa y el señor diputado dice otra; que el autor del proyecto ni la comisión, ni el señor diputado por Buenos Aires pueden decir al país cuánto importan las obligaciones futuras de una caja de jubilaciones para empleados de ferrocarril.

Sobre la base de que los sueldos sean 51 millones y se jubile la tercera parte, transformando esas obligaciones a su valor actual, importan 232 millones de pesos.

¿Qué recursos trae el señor diputado autor del proyecto? Magnificándolos. Llegan hasta 32 millones. Por consiguiente, el déficit es de más de 190 millones.

¿En ninguna parte del mundo se legisla sobre arena, como sería el monumento que levantaríamos nosotros aquí, sin ningún dato preciso!

¿Cuánto valen los años de servicios acumulados de los empleados ferroviarios? Nadie puede decirlo, ni la comisión, ni el autor del proyecto, ni el Poder ejecutivo, porque se necesita hacer un censo de empleados.

Se ha dicho que el proyecto del señor diputado Carlés, importa para la caja un beneficio y le asegura estabilidad. ¿Es un error!

Sr. Carlés—No he hecho esa afirmación.

Sr. Gómez (C. F.)—Los empleados de ferrocarriles deben tener término medio diez años de servicios, y su incorporación a la caja nacional de jubilaciones importa para la misma un recargo de 75 millones.

Sr. Carlés—¿Fantasías del señor diputado!

Sr. Gómez (C. F.)—¿Son cálculos matemáticos!

Me parece, pues, prudente que estudiemos esta ley, después de conocer los datos que nos va a dar una comisión de técnicos nombrada por el Poder ejecutivo. No va a faltar a su deber el Congreso si demora la sanción de esta ley; la dictará después de haberse formado el fondo, por el descuento, como hizo con la otra, por iniciativa del ex ministro le hacienda señor Berduc.

¿Qué peligro hay para los empleados

de ferrocarril? Ninguno. Las más grandes empresas, como he dicho, tienen diez millones para atender a las jubilaciones que se puedan presentar en uno o dos años.

He dicho también, de acuerdo con la comisión, que los empleados de ferrocarriles aceptan el proyecto de la comisión y no el del señor diputado Carlés. ¿Vamos a ser nosotros más católicos que el Papa?

Sr. Carlés—Ahí está, en secretaría, un legajo de cincuenta mil firmas que solicitan todo lo contrario.

Sr. Gómez (C. F.)—Yo creo que el señor diputado dice la verdad, pero también creo que la dice la comisión cuando afirma lo contrario.

Sr. Carlés—No tiene que creerse a mí, sino a las cincuenta mil firmas de otros tantos empleados.

Sr. Gómez (C. F.)—Posteriormente los empleados ferroviarios que dirigen esta gestión han aceptado el pensamiento de la comisión.

Sr. Presidente—Sirvanse no dialogar los señores diputados.

Sr. Gómez (C. F.)—No tiene razón el señor diputado por Buenos Aires al decir que yo no he fundado el proyecto de la comisión, sino combatido el proyecto del señor diputado Carlés.

Después, se me escapa una observación. El señor diputado Carlés y el señor diputado por Buenos Aires, rebatiendo lo que he dicho, sostenían que el proyecto del señor diputado Carlés se refería primitivamente a la ley de jubilaciones. Es un error funesto.

El principal defecto de las reformas a la actual ley de jubilaciones consiste en la edad. El proyecto del señor diputado Carlés manda que a los 25 años de servicios, y con cualquier edad, se jubile todo el personal de los ferrocarriles; y yo sostengo que dentro de veinte años vamos a tener sesenta mil obreros de ferrocarriles, en pleno vigor físico, vagando por las calles de Buenos Aires y por todo el país, exhibiendo su holgazanería, viviendo a costa del tesoro de la caja, que contribuye en gran parte a formar el pueblo de la Nación. Porque, al fin y al cabo, el impuesto sobre los pasajes y otra clase de contribuciones que se indican en el proyecto van a salir directamente de los bolsillos del pueblo. En definitiva, no van a ser las

empresas las que van a pagar, porque ellas encontrarán medio de aumentar las tarifas, perjudicando los intereses de la producción para costear, sin disminuir sus dividendos, los gastos o las obligaciones que les imponga la ley para el sostenimiento de las pensiones y jubilaciones.

Después, señor presidente, todas estas cuestiones que el proyecto del señor diputado Carlés resuelve, son muy graves. ¿Y si las empresas no quieren entregar el fondo de pensiones y se amparan en su ley-contrato? Precisamente si hay diez millones de pesos de reserva en los balances de los ferrocarriles ahí tienen la comisión y el Poder ejecutivo suficiente base para discutir con las empresas cuál ha de ser la contribución que han de aportar para fijarla en la ley general.

Hay, además, esta otra gran cuestión de los otros gremios, que pueden mañana venir a reclamar de nosotros, en su beneficio, otra ley análoga.

¡Pero si son cuestiones muy graves! En definitiva, puede ser que la comisión de *enquête* venga después y nos proponga una ley general de seguro obrero, a semejanza de la del imperio alemán.

No podríamos resolver, pues, así, tan rápidamente, estas grandes cuestiones trascendentales del punto de vista económico, financiero y social. Yo digo, acordándome de una frase de Aristóbulo del Valle quien, siendo ministro, dijo que se cortaría la mano antes de poner el cúmplase a una ley que le parecía monstruosa—que el señor presidente de la República debería decir lo mismo: Antes de promulgar semejante monstruosidad, semejante inmoralidad—porque es una ley completamente inmoral, la que disponga que el personal de los ferrocarriles debe jubilarse con 25 años de servicios, sin límite de edad,—me cortaría la mano.

Sr. Carlés—Puede contestarle con la elocuencia del señor diputado, presidente de la comisión, que no hay más que ver el estado en que quedan los hombres, lisiados, después de 18 años de estar sobre una locomotora.

Sr. Gómez (C. F.)—Por eso debemos dictar esta ley con mucho juicio, con mucha prudencia, con mucha parsimonia, estudiando todos los detalles.

Yo le doy al país todo mi pensamiento en una materia que me ha costado muy largas meditaciones.

Nada más. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Sr. Olmedo—Pido la palabra.

Voy a presentar a la consideración de la comisión, solicitando su mayor benevolencia, algunas observaciones tendientes a demostrar que: o accedemos al temperamento que ha inspirado la iniciativa del señor diputado por la Capital, doctor Carlés, dictando una ley de ejecución inmediata, o deferimos al propuesto por la comisión y sostenido por algunos oradores, de darle al país una promesa en forma de ley. Si lo primero, incurrimos, según las demostraciones de los señores diputados por Santa Fe y por Buenos Aires, en todos los peligros de una improvisación legislativa sobre materias que solicitan una meditación más detenida y un estudio más prolijo, para lo que difícilmente está preparada una asamblea política, sin una larga tramitación del asunto y sin un estudio muy serio del texto de la ley; y si lo segundo, incurrimos, desde luego, en una porción de incongruencias de carácter constitucional y legal. Señalaré algunas, de paso, tan brevemente como me sea posible.

Es una noción corriente entre los señores diputados, como no podía dejar de serlo, que las leyes son la expresión de la voluntad del soberano; y para que esta voluntad se cumpla, ha de ser clara, categóricamente expresada, sin ningún comentario, sin ninguna ambigüedad, sin ninguna explicación: la voluntad neta.

¿Cuál sería la voluntad del Congreso, expresada a propósito de la jubilación de los ferroviarios? ¿Será aquella por la cual los empleados ferroviarios gozarán de una jubilación inmediata, tan pronto como el Poder ejecutivo pusiera el cumplimiento a la ley, y ésta entrara, por consiguiente, en ejecución?

Pues bien: esta ley no realiza este propósito.

Sr. Avellaneda—Sí, lo realiza.

Sr. Carbó—Ninguno de los dos proyectos.

Sr. Bas—Sí, lo realiza.

Sr. Olmedo—Permítanme los miembros de la comisión: no me gusta que me interrumpan, porque no soy interruptor y quiero estar a la recíproca.

Esta ley, por consiguiente, no sería ley, puesto que le faltarían sus caracteres esenciales: los de la voluntad terminante y categórica que ha de ejecutarse a breve plazo, inmediatamente que tenga el cumplimiento que caracteriza su constitucionalidad.

Esta ley promete otra ley. ¿Y por qué? ¿Con qué derecho? ¿De dónde saca esta facultad el Congreso argentino de 1913?

La Constitución de la Nación, la carta orgánica que establece los poderes y el ejercicio de sus atribuciones, puede decir: tal cosa se hará de acuerdo con la ley reglamentaria que dicte el Congreso; pero ninguna ley, en ningún tiempo, puede decir que el Congreso posterior dictará una ley que establezca tales y cuales cosas.

Es una usurpación de facultades que exclusivamente tienen los constituyentes, y que se establecen en los códigos políticos de las naciones, la que esta ley impone. De manera que este proyecto es, de todo punto de vista, inconstitucional.

Tampoco esta promesa es eficaz, ni efectiva, ni real; porque, ¿cuáles son las garantías que la comisión, que la sanción del Congreso darían a los intereses, esperando soluciones con la promesa de una ley que estableciera las condiciones en que ha de verificarse la jubilación de los empleados ferroviarios? ¿Qué garantía ha de poder sacarse de semejante cosa, cuando ya he dicho que no son facultades que residen en el poder legislativo, ni en otro poder, y que sólo se encuentran en las prescripciones de la constitución política, y que, no emanando de la constitución política, son una incongruencia, como he permitido calificarlo?

El Congreso de 1914 puede decir con muy buenas razones que esta ley es inoportuna, que esta ley es prematura, que esta ley podría ser substituida con ventaja por una como la que insinuaba el señor diputado por Santa Fe, que estableciera seguros generales para todos los gremios de obreros y de trabajadores, con preferencia a estas cajas, cuya experiencia entre nosotros es tan poco afortunada, como lo han expresado el señor ministro y los señores diputados, a propósito de la existente.

¿No le parece a la Cámara que toda

la argumentación hecha por la comisión, como la argumentación hecha por sus impugnadores, nos llevaría más bien a una solución de aplazamiento?

Sr. Carlés—¡No! ¡No!

Sr. Olmedo—Perfectamente, señor diputado. No se apresure. No conoce mi pensamiento todavía.

Pregunto con sinceridad, con entera sinceridad, no ocultando absolutamente mi pensamiento, sino explorando el de la Cámara: ¿No le parece a la Cámara que la prudencia y la meditación aconsejarían aplazar este asunto, para el que la misma Cámara no se encuentra preparada, según el concepto de los oradores que han tomado parte en el debate? Porque si el aplazamiento tiene sus inconvenientes, que yo reconozco, si el aplazamiento defrauda esperanzas legítimas, y si el aplazamiento importa la postergación de problemas cuya solución se impone, y si no satisface a la opinión y a los intereses legítimos de gremios importantes de la sociedad, ¿pues, entonces, vamos a estudiar, resueltamente, detenidamente, el fondo de la ley y a dictar la ley de jubilación de empleados ferroviarios, y no a dictar una ley que sea una promesa de ley!

Yo, señor presidente, pienso que este gremio, muy interesante, que ejerce, si no funciones públicas, funciones casi públicas, según la expresión de un estadista americano que hizo escuela, estos empleados ferroviarios están buscando, y con razón, el amparo de una ley que los ponga a cubierto de la codicia del capital, que los ponga a cubierto de los riesgos en el desempeño de funciones penosas, en todos los climas extremos de la República, que los ponga a cubierto de la rapidez con que en esos servicios se gastan las energías vitales y se agota el capital de su propio esfuerzo, que es el único capital con que cuentan para sí mismo y para su familia.

Yo encuentro, no sólo legítima, sino altamente satisfactoria la pretensión de los ferroviarios, que vienen a pedirle al Congreso protección contra todos los peligros, apoyo en todas las incertidumbres, amparo para todas las miserias. Eso, es justo, es noble, y estamos en el deber de dárselo tan pronto como sea posible.

Pero ¿queremos acaso nosotros enganarles, sugiriéndoles la satisfacción inmediata de todas sus necesidades y aspiraciones con una ley que se ejecutará o no, según el Congreso futuro del año 1914 dicte o no la ley de jubilaciones?

Yo sé que los nobles propósitos de la comisión de legislación no han sido, no han podido ser nunca los de una impostura; conozco a sus miembros, tan patriotas como todos los que se sientan en este recinto, inspirados en una línea de conducta caballeresca, y, en consecuencia, al abrigo de la más remota sospecha de toda falta de sinceridad; pero les hago presente,—volviendo a la frase con que empecé las que estoy pronunciando—les hago presente que ellos se hacen la ilusión de que dictamos una ley, mejor dicho, de que aconsejan la sanción de una ley; porque no hay tal ley, porque no existe nada: después de sancionado este proyecto en las dos cámaras del Congreso, y puesto el cúmplase del Poder ejecutivo, no hay sino promesas, no hay nada. La caja no se puede crear sin la ley orgánica.

—El señor diputado Bas interrumpe en voz baja al orador.

Sr. Olmedo—Perdóneme. La caja no se puede crear sin la ley orgánica. Si el Poder ejecutivo creara la caja sin ley orgánica, se expondría a los mayores peligros. ¿Cómo se haría el manejo de la caja?

Sr. Bas—Está previsto en la ley.

Sr. Olmedo—No lo está.

Sr. Bas—No ha leído el proyecto.

Sr. Olmedo—¡Oh señor diputado! Cuando yo soy tan galante con la comisión, no me puede contestar el señor diputado diciéndome que no he leído el proyecto.

Sr. Bas—Si me permite...

Sr. Olmedo—No lo permito.

Sr. Bas—Puede leerse el artículo 1.º

Sr. Olmedo—No puede leerse, porque tengo el uso de la palabra y nadie me la puede quitar. Yo soy respetuoso de los derechos de todos, y me gusta que me respeten de la misma manera.

«Créase como institución del Estado—dice el proyecto de ley—la caja de jubilaciones y pensiones de empleados ferroviarios. con sujeción a las siguientes

bases generales y a las disposiciones de la ley orgánica que deberá dictar el honorable Congreso en el próximo período legislativo para la organización y reglamentación definitiva y permanente de sus servicios».

Todo esto está de más, y es antibológico: bastaba con que hubiera dicho «para su organización», porque eso es lo que se ha querido decir. Estas antibologías muestran que hay debilidad en el concepto fundamental y central de este párrafo, como no puede dejarlo de haber, porque ningún congreso puede comprometer la acción del venidero, como ya lo he demostrado.

Por consiguiente, señor, la caja no está creada. La caja no se puede crear por esta ley.

Ahora, para cuando esté creada la caja, de acuerdo con su ley orgánica—porque como la palabra lo dice, no hay organismo sin ley, no hay personas del orden jurídico sin ley—para cuando la ley esté dictada y para cuando el organismo esté formado, se establecen bases en este proyecto, bases que yo acepto, que yo considero buenas, pero le falta lo principal que es la ley orgánica, es decir, la ley de existencia de la caja.

Sr. Gómez (C. F.).—Todo eso es principal, y la plata, sobre todo, con que pagar a los jubilados.

Sr. Olmedo.—Razón de más.

Y continúo, brevemente, en el análisis ligero de este concepto fundamental de que con este proyecto no hay ley.

¿Quién le dice a la comisión que todas estas mismas bases que ella ha proyectado, y que yo considero buenas, bien intencionadas, destinadas a producir efectos benéficos, en mi concepto, no sean alteradas fundamentalmente por un estudio más detenido, por una penetración mejor de los intereses que crea y guarda esta institución, que venga a aconsejar su modificación?

Si todos estamos discutiendo en la incertidumbre de esta institución o sus análogas, ¿cómo puede comprometerse aventuradamente la opinión del congreso venidero, y todavía comprometiéndola con estas bases que la comisión declara que son las que le sugieren sus conocimientos, cuyos conocimientos no alcanzan a hacer la seguridad y tran-

quilidad en su espíritu, para inducir la a presentar a la Cámara un proyecto de ley definitivo de caja de jubilaciones y pensiones para ferroviarios?

De modo, señor presidente, que no sólo ocurre decir con razón que ésta no es una ley por sus propios términos, sino que, si fuera una ley, sería una ley peligrosa. Porque una de dos: o el congreso del año 1914 no la tiene en cuenta ni siquiera como una promesa parlamentaria, ni siquiera como un *avant-gout* de los que desean obtener su jubilación en el futuro, o el Congreso de 1914, tomando en cuenta esta promesa, se encuentra con que ya la ley le ha puesto cortapisas a su deliberación sobre el fondo del asunto, sobre la esencia misma de la jubilación y de la pensión, sobre las fuentes de los recursos con que ha de formarse el tesoro de la caja, y lo que es más fundamental, sobre si esta institución ha de ser otra institución diferente a la caja de pensiones ya existente, o si ha de existir en las mismas condiciones, para tener la vida precaria que parece que está afectando a la otra caja.

Y ¿qué perspectivas son éstas, señor, para los empleados ferroviarios, que desearan encontrar su porvenir asegurado, sus riesgos previstos y amparados desde el instante en que la ley fuera promulgada? ¿No es ésta una promesa efímera, una promesa banal?

La inteligencia, la preparación y la consagración de la comisión al estudio de este asunto, como a todos los que constituyen su bagaje parlamentario de este año, me excusan de decir que tengo absoluta fe, no sólo en la voluntad manifestada, en definitiva, de dictar un anticipo a la ley, un preámbulo a la organización de esta caja para el porvenir, sino la seguridad para los que están directamente afectados por esta ley, de que la comisión ha hecho todo lo que estaba en su mano para llegar a una solución.

Pero es que, desgraciadamente, los hechos, con su elocuencia abrumadora, contradicen sus aspiraciones y anhelos; es que la comisión no realiza sus propósitos: es que esta caja no puede existir hasta que no tenga su ley orgánica, y, no existiendo, sus resultados son absolutamente ilusorios. ¿Por qué no despachar entonces, este proyecto inclu-

yendo la cláusula del proyecto del señor diputado Carlés, estableciendo que hasta que el Congreso no legisle sobre esta materia especial de las jubilaciones y pensiones ferroviarias, la caja de pensiones abrirá una nueva cuenta, destinada a estos empleados públicos de las empresas?

Si la comisión tiene la seguridad de que el Congreso de 1914, obedeciendo o respondiendo caballerescamente a esta promesa que el Congreso de 1913 empuña ante el país, ha de sancionar el proyecto de ley, como ella se imagina, no puede tener inconveniente en aceptar este voto transitorio, involucrado, ingerido en la organización actual de la caja de jubilaciones y pensiones; porque si la comisión no creyera que el congreso venidero ha de sancionar esta ley, no nos habría propuesto este proyecto.

Por otra parte, el señor diputado doctor Carlés debe tener la más completa satisfacción de que a la base de su pensamiento, incorporando a la caja de jubilaciones y pensiones los ferroviarios de las empresas particulares, la comisión le haya agregado las bases para la ley futura. En tanto, estas bases, sin importar una obligación para el congreso venidero, contienen la sugestión de que el estudio de una comisión inteligente y preparada suministre estos antecedentes como un anticipo al Congreso que dicte la ley definitiva.

Rescapitulo, señor presidente, y digo: que ningún Congreso tiene facultad de dictar una ley que obligue a otro; que esta ley no se hará efectiva aunque tenga el cúmplase; que esta ley no satisface las aspiraciones de los ferroviarios, como no satisface la de los que anhelamos ver realizadas las disposiciones de amparo, ayuda y protección que para ese gremio está en el deber de dictar el Congreso; y que es necesario hacer de los dos proyectos uno solo, dando a la ley los caracteres de ejecución inmediata de que no puede carecer ninguna ley, so pena de no estar bien colocada dentro del marco de la facultad constitucional de legislar otorgada al Congreso de la Nación.

Sr. Bas—Pido la palabra.

La situación de fatiga creada para la Cámara por la ya larga discusión de este asunto me ha de obligar a concre-

tar mi exposición, refiriéndome en conjunto a los diversos argumentos formulados por los señores diputados que han impugnado el despacho.

Francamente, lamento que la exigencia de impugnar algunas leyes especiales relativas a la caja de pensiones pueda haber determinado la oposición a este despacho de la comisión, que tiene por objeto salvar la situación de los empleados ferroviarios.

Debo, desde luego, ratificar las afirmaciones anteriores, de que las personas beneficiadas por esta ley, o sea los empleados de las empresas ferroviarias que van a quedar bajo su régimen, han manifestado su absoluta conformidad, en concreto, con el dictamen de la comisión, con este dictamen que, según sus impugnadores, constituye tan sólo una esperanza, quizás un propósito de engaño, para salvar situaciones difíciles que se supone pudieran venir para el país en caso de no verificarse su sanción.

Sr. Olmedo—Eso no es para mí.

Sr. Carlés—Yo se lo paso al señor diputado...

Sr. Bas—Continúo, señor presidente.

Rechazo en absoluto los elogios de buena voluntad, inteligencia, actividad y contracción que se han hecho en favor de la comisión de que formo parte, para concluir que toda ella se ha sentido presionada, y que bajo la influencia de esa presión ha presentado un despacho que no es tal, lo que desde luego excluye todo concepto de inteligencia y de hombre que tiene el derecho de ser respetado al sentarse en esta banca de diputado.

La comisión de legislación no ha aconsejado una ley de ilusión; ha aconsejado una ley de realidad, ha creado la caja de pensiones y jubilaciones ferroviarias como institución del Estado y reconociendo desde ya el derecho para todos los empleados, no sólo para los actuales, sino para los que dejarán de serlo en el momento en que se dicte la ley orgánica, y deja para la ley posterior simplemente determinar a qué edad, con qué tiempo de servicios se hará la jubilación, y cuál va a ser su cuota. Es una ley de realidad, que desde el primer momento forma el tesoro, reconoce el derecho para los empleados actuales y para los que

dejen de serlo; y lo único que queda es lo que no ha podido decir la comisión, no por falta de estudio ni de inteligencia, sino porque ha sabido proceder como proceden todas las legislaturas del mundo, con criterio sereno y sabio, cuando se procura, a la vez que garantizar la eficacia de sus actos, el respeto y la seriedad que impone el dictar leyes útiles, que no sean un engaño para los empleados, evitando crear una caja que al cabo de ocho o diez años vaya a la crisis y absorba todo el fruto de sus ahorros y de sus sudores.

Sr. Carlés—Sin embargo, es la realidad: la ley vigente.

Sr. Bas—Sí, señor, es la ley vigente la que va a dar ese resultado para la caja de pensiones.

Y no es un argumento el decir que el tesoro de la Nación ha de venir en seguida con sus recursos a tratar de sostener esa caja. No es posible argumentar en esas condiciones. Demasiado gravado se encuentra ya el pueblo contribuyente, para presentar el argumento de que no importa dictar leyes creando cajas que estén fatalmente llamadas a la crisis porque detrás de ellas está el tesoro de la Nación. Bastantes impuestos pesan sobre el pueblo, para obligarle todavía a soportar toda esta carga enorme de favoritismos, muchas veces, cuando no, por desgracia, de impudicias y de miserias!

Pues bien, señor presidente: dentro de este concepto, la ley ha creado la caja, ha creado la institución. Esta es una ley imperativa: desde el primer día que entre en vigencia, el Poder ejecutivo deberá hacerla cumplir, haciendo ingresar a la caja los fondos respectivos; y una vez acumulados esos fondos, deberá nombrar la comisión técnica, que producirá los informes acerca de los factores esenciales para que pueda ella tener eficacia.

No es argumento el de que juntamente con la acumulación de fondos no se dicta la ley determinando las condiciones en que los retiros habrán de ser acordados, mantenidos o perdidos. La ley de jubilaciones y de creación de la caja nacional empezó por una acumulación previa de fondos, en virtud de la disposición de la ley de presupuesto de 1901, que estableció el descuento de

cinco por ciento sobre el sueldo de todos los empleados de la administración.

Pero lo que más me llama la atención, señor presidente, y que, por desgracia, parece una realidad para los empleados ferroviarios, es que todos estos preantos defensores vengán al Congreso a gestionar mucho más de lo que ellos desean, exponiéndose a hacer fracasar esta ley, haciéndoles así perder sus esperanzas y sus legítimas ilusiones.

Voy a concretar ahora otras observaciones, en lo que se refiere al despacho mismo de la comisión.

La comisión tiene, desde luego, la opinión unánime de sus miembros, la del Poder ejecutivo y la del presidente de la caja nacional de pensiones y jubilaciones, que con fecha 7 de septiembre de 1912, se dirigió a ella en estos términos: «La administración de la caja nacional, sin desconocer los elevados alcances del proyecto de ley del señor diputado Carlos Carlés, sobre jubilación del personal de los ferrocarriles de empresas particulares, y sin abrigar dudas respecto a su factibilidad, se permite manifestar, sin embargo, la conveniencia de no involucrar en el régimen de la caja nacional las disposiciones que deban regir la nueva institución. La disparidad de las relaciones de derecho de los empleados oficiales y la administración nacional y de los empleados particulares y las empresas; la inaplicabilidad a empresas y empleados particulares de las disposiciones sobre contralor de servicios y contribución, pérdida de los derechos a la jubilación, etc., calculados para la administración pública, traería dificultades de difícil solución, que no deben dejarse librados al criterio de la administración de la caja, sino que deben determinarse en una ley, por medio de reglas precisas, a fin de que la trascendental iniciativa que envuelve este proyecto no sufra desmedros en su realización.

«Tanto más necesaria es esa ley, cuanto que al reconocerse al Estado la facultad de intervenir en el modo como debe ejercitarse la libertad de explicar las industrias debe consultarse la necesidad de armonizar, en lo posible, las exigencias del interés público y de la moral, con las necesidades de los industriales,

atendiendo por igual los intereses de los obreros y de las empresas.

«No habría inconveniente para que la caja nacional administrara la nueva institución, o para que interviniera en su administración, en concurrencia con representantes de las empresas y de los empleados de ferrocarriles; pero en uno u otro caso debe quedar claramente determinada la intangibilidad de sus bienes, porque ellos son de propiedad de los empleados públicos.

«Esta administración cree que por el momento debía dictarse una ley creando, en principio, la jubilación de los empleados de las empresas de ferrocarriles particulares, encomendándose, en tretanto, al Poder ejecutivo la preparación de todos los elementos que han de servir para dar forma al proyecto de la ley definitiva, etc.»

Pues bien: la comisión, basándose en estos principios elementales de prudencia, en la carencia absoluta de datos precisos—no ya sobre el número de años de los empleados que se encuentran en condiciones de jubilarse, sino, y sobre todo, relativos a la distribución de los empleados en las diferentes categorías—y de un estudio técnico, científico, sobre el tiempo probable de aptitud para el trabajo de cada uno de los empleados de las diferentes categorías, como consecuencia necesaria, y siguiendo el criterio de la legislación mundial sobre la materia, que determina un tiempo y una edad distinta para la jubilación, la comisión, digo, entendía, entiendo y tiene la absoluta convicción de haber presentado un proyecto completo, dentro de la situación en que se encontraba, dentro de la prudencia exigida por instituciones de esta índole, y que satisface en forma absoluta el interés, los propósitos, las necesidades de las personas a quienes va a beneficiar, que han manifestado en forma concreta y terminante su conformidad con las disposiciones del despacho de la comisión.

No es posible, señor presidente, de ninguna manera, aceptar el proyecto del señor diputado Carlés, ni como pretendía el señor diputado por Córdoba, aun que fuera transitoriamente, porque dicho proyecto, aparte de los errores fun-

daментales que contienen las leyes anteriores a él...

Sr. Carlés—Leyes que no forman parte de mi proyecto.

Sr. Bas—Muy bien: suponiendo que así sea, voy a referirme sólo a la ley primitiva, y con esto voy a demostrar una vez más que la comisión no ha procedido por timidez.

Por intermedio de su miembro informante, ha manifestado en una forma categórica su disenso con la incorporación de los empleados ferroviarios a la caja nacional de pensiones, porque entendía que se trataba de una ley absolutamente liberal y totalmente inconveniente, bajo este concepto. Esto implica que la comisión asume toda la responsabilidad de declarar ante el Congreso y ante el país que entiende que la ley relativa a jubilaciones de empleados ferroviarios debe ser mucho más limitada, no sólo en cuanto al porcentaje, sino también en cuanto al tiempo de servicios que debe computarse. Y para esto no iba a inventar, sino a seguir el ejemplo de las legislaciones europeas.

Me voy a referir, por ejemplo, a la ley francesa de 9 de julio de 1853, la cual establece la edad de 60 años de edad y 30 de servicios sedentarios, y 55 años de edad y 25 de servicios activos, y esto con un máximo de 75 por ciento de retiro. La ley belga establece 65 años de edad y 30 de servicios, con un máximo de 67 por ciento de retiro. La ley italiana de 1874 establece 64 años de edad y 40 de servicios, con un máximo de 65 por ciento de jubilación. Lo mismo Inglaterra, Prusia y Alemania.

Sr. Carlés—A eso le contesto con lo que ha dicho el presidente de la comisión, que quiere reducir el tiempo a 18 años.

Sr. Bas—El presidente de la comisión concordando con el miembro informante de la misma, lo único que ha dicho es que no es posible establecer reglas absolutas y precisas; que tratándose de la jubilación de empleados ferroviarios, era necesario distinguir entre el maquinista, que se sacrifica en forma tan brillantemente expresada y el empleado sedentario. Y eso hace la ley francesa, la ley belga, la italiana.

Sr. Carlés—¿Para qué acude a la legislación extranjera, cuando tenemos la

gran ley nuestra, que tiene aplicación para todos los empleados de la Nación? ¡Es *snobismo*, el recurrir al extranjero!

Sr. Bas—Precisamente, señor diputado, para demostrar que la nuestra está llamada al fracaso; y no puedo citarla, cuando voy a llegar a la conclusión de que es necesario proscribirla porque nos lleva a la ruina.

Sr. Padilla (E. E.)—Y porque este proyecto tiene la modalidad especial de que se trata de empleados que no son empleados públicos, sino de empresas particulares.

Sr. Carlés—Es una particularidad de mi proyecto el dar carácter de empleado público a todos los empleados ferroviarios.

Sr. Bas—El señor diputado por Buenos Aires nos hablaba de que esta ley, que desde luego no determina condiciones de edad ni de tiempo, va a perjudicar a los empleados de empresas particulares, porque ellas los hacen gozar de los beneficios de la jubilación, y, dándoles una esperanza, los vamos a privar de una hermosa realidad.

Señor presidente: voy a permitirme leer a la honorable Cámara algunos antecedentes, para demostrar cuál es la condición de estos pobres empleados ante el régimen de las cajas creadas por las empresas particulares.

Desde luego, debo manifestar que esa jubilación se adquiere únicamente a los 60 años de edad, que no se acuerda en ningún caso más de 33 por ciento del sueldo, y siempre con esta cláusula: «El directorio se reserva, asimismo, el derecho, sin restricción alguna, de acordar, rehusar o modificar cualquier pensión que pueda ser solicitada en las condiciones ya mencionadas en este fondo de pensiones. Este fondo de pensiones es un acto graciable de parte del directorio y no un derecho que el empleado adquiere».

Descontar esos fondos del tesoro de las empresas para llevarlos a formar parte de las cajas de reserva y aumentar con ellos los gastos de explotación, parece ser derecho de las empresas; pero cuando se trata de acordar la jubilación al pobre empleado, se le acuerda únicamente la tercera parte, a la edad de sesenta años, y eso con la facultad de que

el directorio la da a su antojo y la quita cuando quiere.

Sr. Carlés—Pero el proyecto, señor diputado...

Sr. Bas—Estoy objetando la observación hecha por el señor diputado por Buenos Aires, de que al sancionar esta ley únicamente les concedemos una esperanza, quitándoles la realidad de la hermosa condición en que se encontraban los empleados particulares bajo el régimen de la jubilación acordada por las empresas.

Sr. Padilla (E. E.)—Yo conozco un guarda-agujas, con treinta años de servicios, que está casi ciego y que no tiene pensión.

Sr. Bas—Sería interminable continuar con estas observaciones; y como la Cámara está algo fatigada, me limitaré a las expresadas.

Sr. Atencio—Pido la palabra.

Sr. Presidente—Se va a votar. Se está tratando en general, y el señor diputado ha hablado ya una vez.

Sr. Atencio—Pido que se declare libre el debate.

—Apoyado.

Sr. Atencio—¡Cómo no voy a tener el derecho de rectificar lo que se ha dicho, aludiendo a lo que ha hablado antes de ahora!

Sr. Massa—Ni siquiera hay necesidad de declarar libre el debate, porque desde que el señor diputado no ha hecho uso de la palabra sino una sola vez, ha de haber por ahí una disposición reglamentaria autorizándole a hablar nuevamente, para rectificar.

Sr. Presidente—Para rectificar solamente.

Sr. Massa—De eso es de lo único de que se trata.

Sr. Olmedo—Hago moción para que se declare libre el debate.

—Se aprueba esta moción.

Sr. Atencio—Empezaré, señor presidente, por referirme a las últimas palabras del señor miembro informante de la comisión, que ha continuado siendo miembro informante en el debate.

Yo no he dicho, y la versión taqui-

gráfica podrá dar fe de mis palabras, ya que el señor diputado por Córdoba no las ha oído, que el proyecto de la comisión de legislación crea una esperanza para los empleados y obreros ferrocarrileros, en defecto de una ventaja o de una situación hermosa como la que tienen bajo esa aparente legislación interna de los ferrocarriles, que crea una pensión y una jubilación para sus empleados.

Me he referido, simplemente, al hecho indiscutible de que los empleados y obreros de los ferrocarriles tienen una situación ventajosa, cualquiera que ella sea, dentro de la situación actual que tienen en las empresas ferrocarrileras, aun reduciendo a una tercera parte la jubilación o la pensión que las empresas otorgan a sus empleados. Si esta ley se dictara tal como la proyecta la comisión de legislación, ni aún esa tercera parte tendrían.

Eso es lo que se refiere al argumento, puramente de efecto, que ha hecho el señor miembro informante de la comisión; argumento puramente de efecto, como aquel en que, en apariencia tal vez, ha querido referirse a mí y, otros de los que hemos reclamado un estudio completo, en vez de un estudio superficial sobre esta materia, cuando ha dicho que nosotros venimos a malograr lo que en apariencia habíamos venido a gestionar cuando la ley estaba simplemente tramitándose.

No hay tal cosa, señor presidente. Nosotros, los que hacemos una aparente impugnación a esta idea, impugnando simplemente el despacho de la comisión de legislación, intentamos que haya una ley formal, estable y completa.

El señor miembro informante de la comisión ha dicho recién, refiriéndose al proyecto de la comisión de legislación, que es una ley completa y perfecta.

El señor diputado ha improvisado cuando ha dicho una cosa semejante. No hay ley completa, no hay ley perfecta. Se necesitaría que las categóricas y claras manifestaciones que ha hecho el señor diputado, doctor Olmedo, sobre el particular, y las que yo mismo he expresado, no tuvieran ninguna consistencia para que esa ley resultara tan perfecta y tan completa como se afirma.

Pero es que el señor miembro informante de la comisión se ha dejado llevar, seguramente, de ese amor propio a que aludía al finalizar mi exposición. Se ha encariñado el señor miembro informante, como posiblemente les pasa lo mismo al resto de los miembros de la comisión, con la obra que han realizado, y a la que han calificado de completa y perfecta. Mientras que hay que tener presente que en este asunto, como en todos los que entran a la deliberación de la Cámara, no ya la comisión que los informa, no ya los diputados que los presentan, sino todos los miembros de la Cámara necesitan dejar de lado esa situación de espíritu, para venir a deliberar ampliamente, aceptando lo que resulte mejor o se demuestre que es mejor para el país.

Nosotros, los que hemos impugnado esta medida propuesta por la comisión, los que hemos aceptado en principio la base fundamental del proyecto del señor diputado por la Capital, doctor Carlés, venimos procurando una situación mejor, más benéfica, más estable, más completa para los obreros y empleados ferroviarios que la que propone la comisión de legislación, puesto que venimos propiciando esto que es lo fundamental, como ha dicho el señor diputado por Córdoba: que haya pensión, que haya jubilación; porque no se trata de la ley que crea la caja de jubilaciones y pensiones, se trata de una ley de jubilaciones y pensiones de los empleados ferroviarios.

¿Qué haría la comisión, qué haría la Cámara, el Parlamento argentino, dictando una ley que acumulara los recursos para la creación de una caja que diera en un futuro pensión y jubilación a los obreros ferroviarios? ¿No es exacto que habríamos dado una ley esperanza?

Ya ve, el señor presidente y la honorable Cámara si hay algo que tenga más base, algo de mayor eficacia, de mayor interés para el gremio de trabajadores, que auspician y reclaman con razón una legislación de esta naturaleza, que lo que sostenemos los que, adoptando un criterio ecléctico, de circunstancias, oportunista, propiciamos el proyecto del señor diputado, doctor Carlés, en cuanto da la jubilación y la pensión, en contra

de lo que propone la comisión de legislación, y en cuanto aporta mayores recursos a la caja nacional de pensiones, dando una ley sin perjuicio de que la Cámara de diputados, que el Congreso argentino dicte en un plazo más o menos breve, no emplazando, porque nosotros no tenemos derecho a ello, sino bajo la presión de la circunstancia y de las necesidades públicas, la ley completa de jubilaciones y pensiones de los ferroviarios.

He dicho.

Sr. Carbó—Pido la palabra.

Cuando pidió la palabra el señor diputado por Córdoba, empezó manifestando que entendía que algunos de los proyectos en discusión no realizaban los propósitos de una ley, y yo tuve la debilidad de interrumpirle, diciéndole que ninguno de los dos.

Pienso como el señor diputado por Córdoba, que cuando se dicta una ley, cuando se habla al pueblo en nombre del soberano, es para que la ley tenga efectividad y que no haya poder que pueda oponerse a esa voluntad del soberano, como no sea la propia voluntad suya, manifestada por el alto tribunal de justicia.

Pero en este caso falla esta condición, porque ninguno de los dos proyectos presentados pone en manos del Poder ejecutivo, desde luego, los medios de realizar este *desiderátum*, este deseo tan manifestado y exigente de la opinión; y exigente, empleando la palabra parlamentaria, no en el sentido de que se venga a presionar con la fuerza, o de que se venga aquí haciendo obstrucción o haciendo insistencia sobre los hombres, sino en el sentido de que está reconocido como una necesidad para el personal de ferrocarriles, que forma esa especie de funcionarios que se ha denominado ya con cierto nombre y que, en realidad hace un servicio público.

Siendo necesaria esa ley, fué saludado con mucha simpatía el proyecto del diputado Carlés y, por mi parte, puedo decir que siempre que en cualquier parte del país he conversado con alguna persona sobre estas materias, se han manifestado todas favorables al proyecto. Yo también soy muy favorable a la idea; pero confieso que no había hecho

un estudio detenido de un proyecto de ley, sino sólo del pensamiento de incorporar a los empleados ferroviarios al derecho a la jubilación.

Producido este debate, señor presidente, creo necesario dar las razones del voto que voy a dar. Mi voto será indiferentemente por uno u otro de los proyectos, porque los dos aceptan, en principio, la idea de la jubilación, y tratan de ir a la formación de un tesoro dentro de la caja general, o de una caja especial. Y digo que me es indiferente uno u otro, porque ninguno de los dos puede importar, desde luego, la obligación de empezar a hacer la jubilación. El del señor diputado Carlés no puede importar eso, no puede exigirlo, desde que dice, en su artículo 6.º, lo siguiente: «Para el cumplimiento de esta ley el Poder ejecutivo tratará con las empresas de esos ferrocarriles particulares, lo referente a las asignaciones del personal y de las empresas que formarán el fondo de la caja, como asimismo lo tocante a la reglamentación y administración de la entrega periódica de las asignaciones a la caja nacional, y el traspaso a ésta del fondo que hayan acumulado las cajas de jubilaciones, etc.»

Todo esto, señor, queda supeditado, por consiguiente, a la voluntad de las empresas, que aceptarán o no los tratos que le proponga el gobierno.

Suponiendo que el Poder ejecutivo tenga la ley proyectada por el señor diputado Carlés, tiene que ir a hacer esos tratos, y es de presumir que no los hará sino cuando esté completamente convencido de que los arreglos que va a hacer son buenos para los ferrocarrileros, y que son previsores en cuanto a las cantidades que se han de aportar para cubrir las obligaciones resultantes de la ley.

En cuanto al proyecto de la comisión, que es un proyecto de esperanza, como se ha dicho, tiene la misma condición. Es decir la comisión se ha colocado en un terreno más lógico, en el sentido de que, reconociendo que no se puede imponer el cumplimiento de esta ley, porque también está supeditada a la voluntad de las empresas, ha declarado que el parlamento que venga ha de dictar la ley orgánica, y que, entonces, no va a funcionar la caja a los efectos de

acordar jubilaciones, sino de recibir dinero hasta que se dicte esa ley. Me apoyo para afirmarlo en la prescripción del artículo 5.º: «El capital de la caja será formado por contribuciones del Estado, de las empresas y de los empleados». Y en el inciso d) del mismo artículo se dice: «La contribución de las empresas y de los ferrocarrileros del Estado, será convenida entre ellas y el Poder ejecutivo, sin que en ningún caso — y esta es la previsión que no tiene el otro, pero que se supone que el Ejecutivo la tendrá— pueda resultar inferior a la cantidad aportada por los empleados y obreros de sus respectivas dependencias».

Así, pues, señor presidente, uno y otro de los proyectos que se tratan van a depender sobre todo de lo que se pueda convenir con las empresas. Si no se puede convenir con ellas, votado, por ejemplo, el proyecto de la comisión, para cuando se expida la comisión que el mismo proyecto de ley crea, es claro que el Congreso no va a hacer una ley orgánica en el aire. Y este es el inconveniente de dictar una ley en las condiciones que decía, no siendo el soberano quien las va a imponer.

Si se vota el proyecto del señor diputado Carlés, quedamos en la misma: el Poder ejecutivo no puede entrar a cumplir la ley, según los términos textuales del proyecto, hasta que se ponga de acuerdo con las empresas.

Por estas razones, señor presidente, muy brevemente expresadas, y deseando que en realidad lleguemos a dictar alguna vez esta ley de jubilaciones, voy a votar indiferentemente por cualquiera de los dos proyectos.

He dicho.

Sr. Sánchez Viamonte—Pido la palabra.

Muy breves instantes voy a ocupar la atención de la honorable Cámara: únicamente deseo dejar constancia del fundamento de mi voto en contra del despacho de la comisión.

Si sólo se tratara de empleados de la administración pública, no haría observación al proyecto; pero como se trata al mismo tiempo de la jubilación de empleados de las empresas ferroviarias particulares, creo que ese proyecto ad-

olece de algunos defectos y que es conveniente llamar la atención de la comisión sobre ellos, o por lo menos dejar a salvo mi opinión al respecto.

Entiendo, señor, por jubilación, una retribución de servicios, tardía, pero retribución al fin.

Es preciso considerar en primer término a quién se prestan esos servicios, porque puede suceder que quien no los recibe es indirectamente obligado a hacer la retribución.

En este caso, señor presidente, los servicios se prestan a los empleados particulares, y sin embargo, el que hace la retribución de esos servicios, el que da la jubilación, es el Estado. Y que es el Estado, no hay la menor duda, desde el momento que el proyecto en discusión establece que se hará el pago de la jubilación con los recursos que allí se designan, entre los que figura en primer término el impuesto a los pasajes.

Ese impuesto a los pasajes está calculado en una suma bastante considerable, porque, según he oído al señor miembro informante de la comisión, se presupuesta en dos millones el descuento a los empleados, en otros dos la contribución de las empresas y en cuatro millones la parte con que contribuye el Estado mediante el impuesto.

Como decía, señor, no considero que el Estado esté en el caso de pagar a las empresas el sueldo de sus empleados, en la forma de jubilación. El sueldo debe comprender, para ser verdaderamente equitativo y suficiente, no sólo lo necesario para la subsistencia del empleado, sino también una parte que debe destinarse al ahorro, a fin de subvenir, cuando lleguen los días de la vejez o de la imposibilidad para el trabajo, a las necesidades ineludibles de la vida.

Como los sueldos son generalmente insuficientes, se ha ofrecido la jubilación como una compensación; pero si el Estado va a pagar las jubilaciones de los empleados y obreros de las empresas particulares, resulta que hace a estas empresas un grandísimo beneficio, porque podrán moderar o reducir sumamente los sueldos que pagan a esos empleados y obreros.

Esta consideración me parece muy importante, señor presidente, y determi-

na mi voto en contra de la sanción del proyecto.

Pero hay algo más. En las mismas condiciones que los empleados de las compañías de ferrocarriles, se encuentran los de otras empresas.

Se dice que lo que determina este beneficio es el servicio público. Pero es que también prestan servicio público los empleados de las empresas de tranvías, los de las empresas telefónicas, los de las empresas de alumbrado público, etc. ¿Y con qué derecho podríamos rechazar una petición de estos empleados, si mañana se dirigieran al Congreso, en nombre de la igualdad, pidiendo que se les comprendiera también en los beneficios de esa ley?

Entonces el número de los acogidos a esta ley aumentaría de una manera indescriptible, y tendríamos la mitad de la población de la República con las perspectivas de una posible jubilación. Esta sería una situación imposible.

Se ha hablado y se ha declamado contra la empleomanía. Pero si se fomentan de esta manera los empleos, si se hace tan segura la vida del empleado a quien se le acuerda una jubilación, seguramente que no serán muchos los que dediquen su actividad a empresas que labren su fortuna y la fortuna pública, y se mermará considerablemente el espíritu de iniciativa.

Estas brevísimas consideraciones determinan mi voto en contra de la sanción del proyecto.

Sr. Presidente—Se va a votar en general el despacho de la comisión.

Sr. Atencio—Antes de que se vote, me permitiré hacer la siguiente indicación.

La hora es muy avanzada. Necesitaríamos sancionar hoy en general y en particular, me parece que sin discusión, el proyecto que pone en vigencia el presupuesto del año pasado para el año corriente...

Sr. Bas—Pido la palabra.

Sr. Presidente—La tiene el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Atencio—Entonces, yo haría la indicación siguiente: que se votara en general el despacho de la comisión de legislación, que será seguramente aceptado, porque la idea no puede ser rechazada, y que dejáramos la consideración en particular de la misma para la

sesión próxima, a efecto de tratar inmediatamente el proyecto de presupuesto y poder estudiar detenidamente, en la discusión en particular que tendría lugar en la sesión próxima, las modificaciones que pudieran armonizar las ideas de la comisión con el proyecto primitivo.

Sr. Presidente—Como la indicación del señor diputado no afecta la votación en general, la Cámara se servirá pronunciar en general sobre el despacho de la comisión.

—Se vota y aprueba en general el despacho de la comisión de legislación.

Sr. Presidente—Está en discusión la indicación del señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Bas—Entiendo que está en discusión en particular el despacho de la comisión.

Sr. Presidente—La Cámara debe pronunciarse sobre la indicación que ha formulado el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Gallo—La Cámara ha resuelto que inmediatamente después de concluido este asunto entremos a tratar el despacho de la comisión de negocios constitucionales sobre intervención a la provincia de Salta.

Sr. García González—La indicación del señor diputado por Buenos Aires importa una reconsideración.

Sr. Anchorena—Que se ponga a votación.

Sr. Bas—No se puede aceptar esa indicación. ¿Qué artículo del reglamento autoriza ese procedimiento?

Sr. Agote—No es reglamentario lo que se pide sea puesto a votación. Debe pedirse la suspensión del asunto para entrar al otro.

Sr. Presidente—En el fondo, es esa la moción del señor diputado.

Sr. Agote—No, señor: en la superficie, en el fondo y en el reglamento, primero es necesario suspender el asunto que está en discusión, y entonces entrar al nuevo.

Sr. Presidente—Esa es la moción del señor diputado.

Sr. Atencio—Señor: en vista de las divergencias que se han producido sobre esta indicación hecha por mí, la retiro.

Sr. Presidente—Está en discusión en particular el despacho de la comisión de legislación.

—En discusión el artículo 1.º

Sr. Olmedo—Pido la palabra.

Por las razones que ya he expuesto a la Cámara, insisto en que es irregular sancionar este artículo. Ningún congreso, lo repito, puede comprometer la voluntad de los venideros, ni directa ni indirectamente. No tiene facultad para tal cosa. De manera que este artículo debe ser modificado, so pena de sancionar una incongruencia.

Sr. Anchorena—¿Qué fórmula propone el señor diputado?

Sr. Olmedo—La que quiera la comisión.

Sr. Etcheverry—Pido la palabra.

Yo estoy de acuerdo con la indicación que se acaba de hacer, de que la parte que se refiere a la disposición que obligaría al Congreso a tratar en este año la ley orgánica es susceptible de modificaciones; y me parece que la comisión no tendrá inconveniente ninguno en substituir esa parte impositiva por estas palabras: «con sujeción a las siguientes bases generales y a las disposiciones de la ley orgánica que dictará el Congreso oportunamente».

Sr. Bas—Si me permite el señor presidente, voy a hacer una indicación, para ver si nos ponemos de acuerdo. Quedaría en esta forma: «Créase como institución del Estado la caja de jubilaciones y pensiones de empleados ferroviarios, con sujeción a las siguientes bases generales y a las disposiciones de la ley orgánica que dicte en oportunidad el honorable Congreso para la organización y reglamentación definitiva y permanente de sus servicios».

Sr. Carlés—Pido la palabra.

Prometo hacer síntesis, tanto más cuanto que al tratarse en general el despacho de la comisión me ocupé de las dos prescripciones que envuelve el artículo que ahora disutimos en particular.

No hay más que leer ese artículo, para ver que se proponen dos cosas completamente diversas: la primera es la creación de una caja, que se instituye independiente de la caja nacional, y la segunda es la postergación del proble-

ma jubilatorio hasta que se dicte la ley complementaria en la forma que lo proyecta la comisión.

Entiendo que la caja que se crea independiente, es innecesaria, puesto que desde hace ya diez y seis años presta sus servicios en forma irreprochable la actual caja nacional, para la cual la incorporación de los empleados ferrocarrileros particulares no significará más que una simple ampliación de servicios existentes.

No veo claramente la lógica de la comisión entre las disposiciones de la primera y de la segunda parte del artículo en discusión, porque ¿cómo se explica que se cree ya una caja cuya existencia va a determinar una ley futura?

Podría suponerse que esta caja tendrá una utilidad inmediata; como sería que en el tiempo que medie entre estas dos leyes se llenaran propósitos determinados; pero no lo cree así la comisión en su artículo 10, que establece que las funciones que desempeñaría esa caja serán realizadas por la caja nacional, lo que demuestra que para la comisión misma no es de utilidad inmediata.

Considero también pernicioso esa disposición, porque crearía y daría pábulo a la corruptela que significa la multiplicidad de oficinas con un mismo objeto, y que en realidad no hace más que abultar las partidas del presupuesto. Ya no serán sólo múltiples oficinas de estadística, de imprenta, de archivo; van a ser también cajas de jubilación las que aumentarán las pintorescas partidas que figuran en todos los anexos del presupuesto.

Por todas estas razones, digo que la caja, tal como la proyecta la comisión, no es indispensable, no es necesaria, no es útil, y es pernicioso.

Paso a la segunda prescripción del artículo en discusión.

En ella se posterga la solución del problema, y se posterga tras una quimera: esta quimera de la comisión en procura de algo mejor que le hace olvidar la realidad de nuestra legislación actual.

La legislación en vigor desde hace diez y seis años llena todas las aspiraciones de los empleados ferroviarios de la Nación; por lo tanto, dentro de la más estricta lógica, debemos creer que ella

llenará todas las necesidades de los empleados de los ferrocarriles particulares.

Esa jurisprudencia de nuestra legislación concuerda con los precedentes establecidos por nuestros congresos, en todos los casos que han extendido sus leyes de amparo a las grandes masas de empleados que ha cobijado en la ley de jubilaciones.

Querer modificar esta norma, sería obstaculizar la realización del deber que nuestra cultura legislativa tiene aún pendiente, no obstante la opinión adversa del distinguido autor de la ley general, de llevar su amparo a todos los empleados que utiliza la industria privada.

Sr. Gómez (C. F.)—Yo no estoy en contra; soy partidario del seguro obrero en el país.

Sr. Carlés—Esta simplicidad de nuestra legislación es el resultado de haber encontrado la fórmula de convivencia entre las seguridades que el capital requiere y las necesidades de amparo de los empleados de los que se valen las industrias para prosperar.

No son ideas tendenciosas ni sectarias las que desenvuelvo, puesto que ellas están inscriptas en todos los programas de las multitudes argentinas, sean cuales fueren las denominaciones que ellas tengan, porque son principios consagrados por nuestra Constitución nacional!

De ahí ha surgido un cuerpo de legislación que se aplica a todas las modalidades empleables de la industria privada.

De suerte que, a mi entender, nosotros tenemos en la mano todos los elementos para poder resolver ya el problema definitivamente, para la cual sería necesario, sencillamente, que la Cámara se decidiera a afrontarlo y reemplazara las prescripciones que propone la comisión con otra que diga lisa y llanamente: que queda comprendido el personal de los ferrocarriles de las empresas particulares en las disposiciones de la ley 4340, en lo referente a jubilaciones de funcionarios, empleados o agentes civiles de la Nación. Con esta categórica disposición habremos resuelto el problema.

He concluido. (*Movimiento de aprobación en las bancas.*)

Sr. Bas—Pido la palabra. Voy a ser sintético.

Dos objeciones fundamentales se han hecho al artículo en la forma en que se encuentra redactado. La primera, es que se crea una caja de jubilaciones independiente y separada de la caja nacional, y la segunda, que se refiere a la cuestión fundamental del proyecto, que viene a dilatar la solución del asunto, mientras que la idea del proyecto originario lo resolvía realmente.

La segunda cuestión ha sido ampliamente discutida ya, y creo, por consiguiente, inoficioso volver sobre ella. Por lo que se refiere a la primera, no se ha hecho otra observación que la que podría significar una pequeña suma de dinero.

Hay razones de orden fundamental que implican la necesidad de una caja con distinta administración, opinión con la cual se encuentra perfectamente de acuerdo el Poder ejecutivo y la misma presidencia de la caja de pensiones y jubilaciones. Por consiguiente, si es necesaria una ley especial relativa a empleados dependientes de empresas particulares que van a estar sometidos al régimen de esta ley, y si al mismo tiempo conviene que la administración de esos fondos dependa de una comisión, no veo la razón fundamental para que el gasto, que pudiera representar unos cuarenta o cincuenta mil pesos, pueda sobreponerse a esas otras consideraciones fundamentales, y, desde luego, se vendría a desnaturalizar en forma absoluta el concepto de la legislación: sería destruir la ley y hacerla desaparecer.

Por consiguiente, desde el momento que la Cámara ha votado el despacho de la comisión en general, aceptar el proyecto del doctor Carlés sería votar en una forma absolutamente contradictoria.

Sr. Olmedo—Está equivocado el señor diputado. El voto en general no es sino sobre la idea.

Sr. Bas—Es una opinión mía, señor diputado.

Sr. Carlés—¡Ah! ¿no es de la comisión?

Sr. Gómez (C. F.)—Pido la palabra. Es para dar un dato a la honorable Cámara.

Respecto a la multiplicidad de las cajas, quiero decir al señor diputado autor del proyecto, que en la pequeña Suiza hay 30 cajas de ferrocarriles y de empresas de transporte, todas especiales. Lo mismo sucede en Francia y en Italia.

Sr. Llobét—En Suiza, el sistema federal obliga a esa diversidad.

Estamos en presencia de la creación del montepío militar. Será otra caja más, y se explica que no haya más que dos, la civil y la militar, a las cuales deben concurrir todos los empleados de la Nación y todos los militares y asimilados.

Sr. Carlés—Tardaba en llegar la opinión del señor presidente de la comisión de presupuesto.

Sr. Llobét—No es del presidente de la comisión de presupuesto; es particular mía.

Sr. Pastor—Pido la palabra.

He aplaudido en lo íntimo, y en silencio, la notable iniciativa del señor diputado Carlés y el brillante trabajo de la comisión de legislación. Pero de toda la discusión habida en este recinto queda este resultado para todos los espíritus: no hay suficiente estudio, no hay uniformidad de opinión, no hay una tendencia bien caracterizada, no hay un propósito decidido, neto, ni bien definido en este asunto.

Nos estamos deslizando en un terreno peligrosísimo; y lo peor de todo es que el tiempo apremia y nos vemos obligados, como decía el señor diputado Carlés, a hablar haciendo síntesis, cuando debiéramos deliberar con toda libertad de conciencia y de espíritu.

Después de oír esta discusión, en que he estado callado, esforzándome, conteniendo mis deseos para poder armonizar tanto como se ha dicho en este recinto sin llegar a nada práctico, me siento, como diputado de conciencia, inhabilitado para dar mi voto y seguir opinando en este asunto en la forma en que se ha planteado.

Yo creo, señor presidente, que no debemos decir «Caja de jubilaciones y pensiones»; yo creo que debemos decir: «Banco habilitador y de pensiones y jubilaciones de obreros de ferrocarriles», porque precisamente el fracaso de las instituciones de esta índole está demos-

trando de una manera evidente que proviene de este gran estancamiento de capitales, sin darles el giro necesario para que se beneficie la institución.

Tengo un pensamiento que me sugiere la misma discusión habida; pero en el estado actual, apremiado por el tiempo, que vence a las ocho de la noche, pues después de esa hora será imposible mantener el quórum, yo pido que se aplaze la consideración de este asunto, que vuelva a comisión, para que cada uno aporte los conocimientos que puedan dar un resultado práctico.

Sr. Presidente—Tratándose de una moción previa, está a discusión de la honorable Cámara.

Varios señores diputados—No ha sido apoyada.

Sr. Presidente—¿Está apoyada la indicación del señor diputado por San Luis?

—Apoyado.

Sr. Presidente—Está en discusión.

Sr. Atencio—Tal vez tendría que complementarla el señor diputado, diciendo hasta cuándo sería el aplazamiento.

Sr. Padilla (E. E.)—Este asunto ha sido estudiado por la comisión, ha sido despachado, ha sido encargado a la Cámara el 16 de diciembre, y hoy nos viene a decir el señor diputado que no está habilitado para tratarlo.

Sr. Pastor—Después de la discusión, resulta que no está suficientemente estudiado.

Sr. Padilla (E. E.)—; Absolutamente! Lo que hay es que todos los diputados deben estudiar los asuntos, sin que importe que en la discusión haya discrepancias.

Sr. Pastor—; Le voy a demostrar al señor presidente de la comisión que estoy más preparado que él en este asunto! (Risas.)

Sr. Presidente—; Sírvanse los señores diputados no dialogar!

Sr. Escobar—; El señor diputado Pastor debe iluminarnos a todos!

Sr. Presidente—Se votará la moción.

—Se rechaza.

Sr. Presidente—Continúa la discusión del proyecto.

Sr. Pastor—¡Las ideas son propias, y cada diputado tiene el derecho de expresarlas en este recinto! ¡Pueden tener o no acogida; eso no me deprime! ¡No soy de los que se sienten afectados por una unanimidad adversa!

Sr. Palacios—El señor diputado no tiene el derecho de hablar, después de la unanimidad que ha manifestado la Cámara, rechazándole la moción!

Sr. Pastor—¡Hablo de mis ideas! ¡A mí no me va a deprimir la unanimidad!

Sr. Presidente—Se va a votar el despacho de la comisión, con la modificación propuesta por el señor diputado por Buenos Aires y aceptada por la comisión. Siendo rechazada, entrará en consideración la indicación del señor diputado.

Sr. Pastor—¡Debo continuar con la palabra, porque tengo observaciones en particular que hacer a ese artículo!

Sr. Presidente—(*Agitando la campanilla*), ¡Se está votando, señor diputado!

Sr. Pastor—¡No, señor presidente!

Sr. Presidente—(*Agitando la campanilla*)—Le prohíbo el uso de la palabra al señor diputado! ¡Se está votando!

Sr. Conforti—¡Es el derecho de todo diputado hablar! ¡Hago constar mi protesta por ese acto!

Sr. Pastor—¡No me la puede prohibir!

Sr. Presidente—(*Agitando la campanilla*)—¡No tiene el uso de la palabra el señor diputado!

Sr. Conforti—¡Protesto contra esa restricción! ¡Se debe dejar hablar a todo diputado!

¡No se deben hacer distinciones para dejar hablar a unos y no a otros!

Sr. Presidente—Sirvanse pronunciarse los señores diputados sobre el artículo propuesto.

Sr. Pastor—¿Por qué me va a privar el señor presidente del uso de la palabra?

Sr. Presidente—¿Hace moción de reconsideración?

Sr. Pastor—Me ha interrumpido cuando iba a pedir que vuelva este asunto a comisión.

Sr. Presidente—Tiene la palabra para observar el artículo primero.

Sr. Pastor—He manifestado que tengo una idea que considero fundamental; y tengo el derecho de defenderla en es-

te recinto! ¡No me lo puede prohibir el señor presidente!

Sr. Presidente—No se lo prohíbo. Le hago cumplir el reglamento.

Sr. Pastor—¡Es una prohibición en absoluto al uso de la palabra, decirle a un diputado: se está votando y no se puede hablar!

Sr. Presidente—¡Pero, señor diputado, es lo que manda el reglamento!

Tiene la palabra el señor diputado, para referirse al artículo primero.

Sr. Pastor—Sí, señor; a ese me voy a referir.

Sr. Agote—El señor diputado puede hablar y decir todo lo que quiere.

Sr. Presidente—¡Si no se le ha prohibido al señor diputado!

Sr. Pastor—Agradezco la cortesía.

Sr. Presidente—No es cortesía; es cumplir el reglamento.

Sr. Pastor—Voy a proponer a la consideración de la honorable Cámara y especialmente a la de la comisión de legislación una modificación, que, en mi sentir, es fundamental.

Tenemos todas estas vibraciones que nos llevan a ciertas actitudes, y espero que hombres tan cultos como los miembros de la comisión, tendrán la deferencia de escuchar esta humilde idea, que no tiene otra ventaja que la de ser fruto del estudio.

A este respecto se ha dicho de una manera categórica que es uniforme la opinión, puesto que el autor del primer proyecto, señor Carlés, la comisión de legislación, el diputado por Buenos Aires señor Atencio, y el señor diputado por Santa Fe, doctor Gómez, coinciden en que la caja de pensiones y jubilaciones está más o menos en bancarrota y amenazada de una crisis inminente.

Indudablemente, lo que correspondería sería dictar una ley que salvara la institución, agregando el proyecto del señor diputado Carlés, incorporando a la caja de jubilaciones de la Nación a estos empleados que no por ser de empresas particulares dejan de ser empleados de la Nación y que tienen el mismo privilegio y derecho de ser amparados por las leyes de la misma.

Pero, señor presidente, este mal tiene otro origen. Las cajas de pensiones y jubilaciones fracasan constantemente por falta de proporcionalidad entre el

recurso y la erogación, o sea por la impotencia de la institución misma para satisfacer los intereses de los empleados.

Nosotros tenemos, entonces, que empezar por establecer un mecanismo dentro de esta ley de jubilaciones, que yo quiero que sea ley de realidades, ley de verdades, ley de satisfacciones para los que trabajan y cooperan al progreso del país; y para realizar esto tendríamos que empezar por pensar cuáles son los defectos capitales de esa caja de pensiones y jubilaciones, para no seguir en el error de instalar otra caja de jubilaciones y pensiones que tenga aquel mismo fin, o que no realice su objeto. Entonces, he pensado, señor presidente, que bajo la denominación de «Banco habilitador y de pensiones y jubilaciones», nos vamos a aproximar un tanto a la verdad, es decir, vamos a aproximarnos al ideal común que a todos nos inspira, que es el bien de los obreros, que es bien general, para estos factores del progreso nacional.

Entonces, ¿cuál es el rol de ese banco, rol que no puede desempeñar la caja de jubilaciones y pensiones, porque la caja de jubilaciones y pensiones no es más que una caja guarda-capitales, caja que mantiene estacionada una cantidad considerable de dinero, sin darle ningún giro, sin producir ninguna evolución, y que, por consiguiente, nada produce; al contrario, se le retrae de a circulación y se le priva así de que contribuya a ser un factor eficiente en el progreso futuro del país?

Entonces, con el establecimiento del banco habilitador podríamos llegar a este ideal nobilísimo, enunciado ya en esta Cámara por el proyecto del doctor Cafferata, sobre casas para obreros, y que está despachado por la comisión de legislación, puesto que el banco habilitador permitiría a cada obrero que va a ser mañana jubilado y que aporta la economía de su sueldo efectivo, por el 5 por ciento que viene acumulando año por año, disponer en un momento dado, cuando más no fuera de ese 5 por ciento, para ir elaborando la casa, para llegar a este ideal del obrero, que cuando llega la vejez, abandona el trabajo porque le faltan las fuerzas, tenga ya su casa pro-

pia y su jubilación, que es la coronación de la vida.

No deliberéis tanto, señores diputados, en el número de años, en ese detalle. No olvidéis lo que es humano, y que en lo humano debe entrar esta consideración especialísima: ¿para qué sirve al pobre obrero una jubilación, cuando ya le falta la fuerza, cuando va a morir, cuando no tiene ningún porvenir?

Estas ideas tienen que constituir la norma de las sociedades modernas: asegurar el mayor bienestar posible en el menor tiempo posible, sin perjudicar los intereses de la Nación ni de la administración pública.

Si la Nación Argentina, por su potencialidad económica, por la gran fuerza de su riqueza, puede realizar esta aspiración, que la Europa, agotada en sus recursos, ha realizado, de jubilar a sus obreros, debe hacerlo, para evitar que mañana se vean obreros vagabundos por las calles; obreros que tienen el hábito del trabajo, que tienen la conciencia del deber, y los que tienen el hábito del trabajo y la conciencia del deber son obreros siempre, aunque estén jubilados.

Como dije, la caja no puede realizar estos ideales, pero un banco habilitador sí; el cual tendría, además, esta otra ventaja: que establecería la libreta de control entre las empresas y el obrero. ¿De qué manera, señor presidente? Las empresas dirían en sus listas: tengo tantos obreros, a tanto sueldo; y esa lista pasaría a la dirección del banco, que serviría para darle al obrero un documento que tendría esta doble ventaja: la identidad del obrero, perfectamente establecida, para lo que se tomarían las precauciones, y la libreta que lo habilitaría para obtener los pequeños préstamos, tendientes a llenar sus premiosas necesidades.

Bien, señor presidente: yo le propondría a la comisión,—guardando para más adelante, para cuando se trate el artículo 4.º, que trata de los recursos, dar el pensamiento complementario de esta idea,—quisiera aceptar esta simple modificación: «Créase como institución del Estado, un banco habilitador y de jubilaciones y pensiones, con sujeción a las siguientes bases generales y a las disposiciones de la ley orgánica que dicte el Congreso en oportunidad».

la comisión. Pero hay una modificación que introducir.

Dice aquí: «Las sumas anuales percibidas». Hay ya un fondo existente, una suma existente con anterioridad, y si se mantuviera la redacción tal como está, ese fondo ya existente no entraría. Yo propondría, en consecuencia, que se suprimiera la palabra «anuales» y se dijera: «Las sumas percibidas y no reclamadas por el público», etc.

La segunda modificación que propongo es sobre el inciso *d*) que dice: «La contribución de las empresas y de los ferrocarriles del Estado será convenida entre ellas y el Poder ejecutivo, sin que en ningún caso pueda resultar inferior a la cantidad aportada por los empleados y obreros de sus respectivas dependencias».

Desde que se fija el *mínimum*, es de presumir que las empresas se van a atener a él, y, por consiguiente, la contribución propiamente dicha está ya determinada en la ley. Lo que me parece que ha querido la comisión, al redactar este artículo, es decir que la forma de contribución de las empresas será convenida con el Poder ejecutivo. Y entonces yo propondría a la comisión que agregara la palabra «forma»; que se dijera: «la forma de contribución de las empresas», en vez de decir: «la contribución de las empresas». Es una cuestión sencilla, de simple redacción.

Sr. Bas—Ese es el pensamiento de la comisión. No hay inconveniente en aceptar la modificación que propone el señor ministro.

Sr. Etcheverry—Pido la palabra.

Para complementar parte de la indicación que acaba de hacer el señor ministro de obras públicas en este inciso *d*).

La contribución de las empresas para el fondo de esta ley, está establecida en la misma ley 5315 a que están acogidas la mayoría de las empresas; y está también establecida esta contribución en uno de los artículos del decreto reglamentario, hecho por el Poder ejecutivo, para la misma ley.

Esta contribución de las empresas, de acuerdo con el decreto reglamentario, forma parte de lo que se llama gastos de explotación, que es un tanto por ciento que se toma de las entradas para

formar los gastos de explotación, que, de acuerdo con el artículo 9 de la ley 5315, deben ser el 60 por ciento.

Mi observación tiende a lo siguiente: la disposición del inciso, al establecer que esta contribución no debe ser inferior en ningún caso a la cantidad aportada por los empleados y obreros de sus respectivas dependencias, puede llevar a la conclusión de que se sobrepase el 60 por ciento de los gastos de explotación, viniendo a hacer daño, diré, a los términos claros de la ley 5315, en lo que se refiere a la intervención de las tarifas. Es sabido que el artículo 9.º de la ley 5315 establece que las tarifas no pueden ser intervenidas por el Poder ejecutivo sino cuando en tres años sucesivos el producido bruto no exceda del 17 por ciento del capital establecido en acciones y obligaciones, y los gastos de explotación no sean superiores al 60 por ciento. De manera que si sobrepasamos ese 60 por ciento, ya el Poder ejecutivo perderá la oportunidad de intervenir en las tarifas.

Creo que esa no ha de haber sido la mente de la comisión; que habrá sido, por el contrario, la de mantener en todo su vigor las disposiciones de la ley de ferrocarriles a que están acogidas las empresas. Y en este sentido, yo me permitiría indicar un agregado a este inciso que dijera así, al final del mismo: «sin que en ningún caso pueda resultar inferior a la cantidad aportada por los empleados y obreros de sus respectivas dependencias, siempre que por este concepto no se sobrepase el 60 por ciento de los gastos de explotación que establece la ley 5315».

Sr. Ministro de obras públicas—Pido la palabra.

El Poder ejecutivo lamenta no poder aceptar la indicación que formula el señor diputado por Buenos Aires, por las razones que brevemente expondré.

La ley 5315 representa un régimen en cierto modo contraactual, porque se han acogido al artículo 8 y 9 de la misma varias empresas que no tenían necesidad de acogerse, desde que gozaban todavía de las franquicias aduaneras por un número considerable de años.

Por otra parte la ley establece terminantemente el sesenta por ciento como una base puramente hipotética, porque

un artículo siguiente determina que las empresas podrán demostrar al Poder ejecutivo que sus gastos de explotación han excedido de esa cantidad, en cuyo caso se tomarán los verdaderos gastos de explotación para el cálculo que la ley establece.

Esto no es una simple hipótesis; es un hecho. Hay varias empresas que demuestran que sus gastos de explotación exceden al sesenta por ciento; algunas llegan hasta el ochenta por ciento como coeficiente de gastos.

De manera que la proposición del señor diputado importa una modificación al sistema orgánico de la ley 5315, que vendría a hacerse ahora en una forma accesoria.

Yo creo que habría un grave inconveniente, que nos podría traer mayores dificultades, en aceptar esto; y me parece que sería preferible dejar el artículo como lo propone la comisión, que es más simple, y con el cual creo que es más fácil conseguir un arreglo con las empresas.

Por estas razones, brevemente expresadas, creo inconveniente el agregado presentado por el señor diputado, y propondría a la comisión que no lo aceptara.

Sr. Etcheverry—Pido la palabra.

Posiblemente no ha sido bien interpretada mi exposición.

Precisamente yo tiendo a mantener el régimen creado para las empresas con arreglo a la ley 5315, que faculta al Poder ejecutivo a intervenir en sus tarifas cuando el producido bruto exceda al 17 por ciento del capital. Ahora, cuando las empresas han hecho gastos de explotación mayores de 60 por ciento, lo prueban.

Sr. Ministro de obras públicas—En este caso lo probarían.

Sr. Etcheverry—Pero yo quiero mantener, precisamente para bien de la misma explotación ferrocarrilera y de los intereses de los cargadores, la posibilidad de que pueda intervenir en esas tarifas cuando se haya llegado a ese tanto por ciento. Si nosotros, por la razón de crear fondos para la caja de pensiones, aumentamos ese coeficiente, vamos a quitar la probabilidad establecida ya por la ley como facultad, para el Estado, de intervenir en las tarifas.

Sr. Presidente—Debo prevenir a la honorable Cámara que no hay quórum en la casa. En consecuencia, la invito a pasar a cuarto intermedio.

—Así se hace siendo las 8.15 p. m.